



HOJA DE RUTA

para la elaboración del Plan Nacional de Implementación de
los derechos de acceso en asuntos ambientales

ACUERDO DE ESCAZÚ - URUGUAY

Versión diciembre de 2023 (primera parte)
febrero 2024 (segunda parte) , con ajustes (marzo 2024)

Grupo de Trabajo en derechos de acceso de la COTAMA

Ministerio de Ambiente
con el apoyo de CEPAL

Tabla de contenidos

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Presentación
2. Objetivo y alcance del presente trabajo
3. Metodología

CAPITULO II - LÍNEA DE BASE del marco normativo y prácticas vinculadas

1. Introducción
2. Resumen del análisis respecto del articulado (artículos 5 al 9)
 - Artículo 5 - Acceso a la información ambiental
 - Artículo 6 - Generación y divulgación de Información Ambiental
 - Artículo 7 - Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
 - Artículo 8 - Acceso a la justicia en asuntos ambientales
 - Artículo 9 - Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

CAPITULO III - MAPA DE ACTORES

1. Introducción
2. Objetivo
3. Metodología
4. Identificación y clasificación de actores
 - A. ACTORES DEL SECTOR ESTATAL
 - B. ACTORES INTEGRANTES DEL PÚBLICO

CAPITULO IV - Propuesta de COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

1. Introducción
2. El Ministerio de Ambiente y la COTAMA
3. Formulación de la propuesta

CAPITULO V - Propuesta de OBJETIVOS y ACCIONES PRIORITARIAS

CAPITULO VI - Estrategia de INFORMACION y PARTICIPACION

Bibliografía

Listado de acrónimos

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Presentación

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, es considerado el primer instrumento multilateral ambiental de la región, abierto a la integración de los 33 países latinoamericanos y caribeños.

Uruguay fue uno de los diez estados que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida como Río+20), celebrada en 2012, manifestaron su voluntad política de concretar la aplicación en la región del Principio 10, proveniente de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que establece:

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

Nuestro país participó activamente del proceso de negociación en torno a la aplicación del Principio 10, que desembocó en la adopción del Acuerdo de Escazú y fue uno de los primeros en ratificarlo, a través de la Ley Nº 19.773, de 17 de julio de 2019. Tras recibir el depósito de las once ratificaciones o adhesiones necesarias según el artículo 22, el Acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Uruguay preside la mesa directiva del Acuerdo, a través del punto focal nacional designado por el Ministerio de Ambiente, desde la primera Conferencia de las Partes, celebrada en 2022, en la sede de la Secretaría del Acuerdo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El texto del Acuerdo de Escazú consta de 26 artículos, un Anexo y un Preámbulo. El tratado reconoce los tres derechos de acceso para alcanzar el derecho sustantivo a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras (artículo 1). Esos tres derechos constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo, que son:

- (i) el derecho de acceso a la información ambiental, orientado a garantizar la transparencia de la información pública ambiental, en su dimensión pasiva y activa (artículos 5 y 6);
- (ii) el derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el ambiente y asuntos ambientales de interés público, como la elaboración de políticas y planes que puedan tener las mismas consecuencias (artículo 7); y,
- (iii) el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, referido a las garantías del debido proceso en instancias judiciales y administrativas relacionadas con el ambiente (artículo 8).

Asimismo, el Acuerdo de Escazú también es considerado el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas para tratar de garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (artículo 9).

Las obligaciones que se establecen en el Acuerdo de Escazú son jurídicamente vinculantes para las Partes, aunque la naturaleza de las obligaciones que surgen de ellas varía de una disposición a otra, según los términos que se utilizan. Algunos tienen una intención preceptiva, pero en otros casos son recomendaciones o enumeraciones indicativas y no exhaustivas.

Según la “Guía de implementación” del Acuerdo (CEPAL, *“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: guía de implementación”* [LC/TS.2021/221/Rev.2], Santiago, 2023, disponible on line), la implementación nacional es el núcleo de la efectividad del tratado, lo que en general deja a cada Parte la responsabilidad última de elegir o encontrar la forma de cumplir las disposiciones. Cada Parte es responsable de tomar las medidas necesarias; en algunos casos, de acuerdo con sus posibilidades o de conformidad con sus prioridades nacionales.

Lo que debe primar es la coherencia y la compatibilidad, para que no se generen discrepancias entre el Acuerdo y la legislación nacional.

Pero además, si bien algunas disposiciones del Acuerdo podrían entenderse como autoejecutables, otras pueden requerir normas legales, reglamentarias o interpretativas de forma de armonizar la legislación nacional con los estándares del Acuerdo.

Sobre este aspecto la Guía de Implementación contiene orientaciones precisas. Las disposiciones autoejecutables de un tratado pueden surtir efectos jurídicos a nivel nacional sin necesidad de desarrollos normativos internos. Si bien el carácter autoejecutable de las disposiciones de los tratados se debe determinar caso por caso en cada sistema jurídico, hay algunos criterios que deben considerarse en relación con el Acuerdo de Escazú: i) que la disposición cree derechos y obligaciones claros y exigibles, y que no sea meramente programática; ii) que los destinatarios de esos derechos y obligaciones sean personas o grupos y estén claramente definidos, y iii) que la disposición pueda aplicarse sin necesidad de adoptar ninguna medida nacional que la desarrolle o complete. Es decir, que se trate de una norma autocontenida, que cuente con todos los elementos para su aplicación de manera directa e inmediata.

Por todo ello es muy importante analizar el marco jurídico nacional referido a los derechos de acceso.

Adicionalmente debe tenerse presente que el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que establece mínimos, otorgando a las Partes un margen de discrecionalidad para cumplir con sus obligaciones de forma gradual y progresiva y que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados. Sin embargo, garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso en asuntos ambientales forma parte del propio objetivo del Acuerdo de Escazú, rigiéndose por los principios que se establecen en el artículo 3, como el de no regresión y el de progresividad.

La Guía de Implementación, señala que la progresividad se ha aplicado en particular a los derechos económicos, sociales y culturales. De conformidad con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados se comprometen a adoptar medidas, tanto en forma individual como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos allí reconocidos. El principio de progresividad se consagra asimismo en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

La progresividad, por tanto, ofrece un cierto grado de flexibilidad, aunque no signifique la posibilidad de la inacción; y, por tanto, no despoja a las obligaciones de su contenido, pero no necesariamente debe ser logrado instantáneamente.

2. Objetivo y alcance del presente trabajo

El Ministerio de Ambiente, como autoridad nacional y punto focal para la aplicación del Acuerdo de Escazú en nuestro país, ha entendido necesario contar con un plan nacional para la implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales.

Para ello, se cuenta con la cooperación de la CEPAL, como Secretaría del Acuerdo.

El presente informe se inscribe en ese marco y recoge los avances y conclusiones hasta el momento, como insumo al proceso.

3. Metodología

El proceso completo se estructura en cuatro partes, correspondientes a cada uno de los pasos de la metodología propuesta por CEPAL:

- (i) La primera parte refiere a la **línea de base de normas y prácticas vinculadas** que se relevaron en el país, vinculadas a los derechos de acceso y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Para ello, se identificaron y recopilaron las normas jurídicas nacionales relacionadas con las previsiones de los principales artículos del Acuerdo de Escazú. Asimismo, según la información con que cuentan las consultoras y la que se desprende de las entrevistas que más adelante se dirá, se incluyeron las prácticas administrativas detectadas y referidas a las disposiciones del Acuerdo.

El documento incluye los hallazgos y el análisis de las normativas generales y específicas, y las prácticas relacionadas con cada párrafo de los artículos 5 y 6 (acceso a la información ambiental), 7 (participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales), 8 (acceso a la justicia en asuntos ambientales) y 9 (protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales).

El análisis de cada artículo culmina con una sección de conclusiones, que busca orientar la definición de oportunidades de mejoramiento y la identificación de acciones prioritarias.

- (ii) La segunda parte refiere a un **mapa de actores** estatales, académicos, privados, de la sociedad civil y de otros sectores sociales, que debieran vincularse a la implementación del Acuerdo de Escazú. Para ello, se mantuvieron más de 50 entrevistas con distintos representantes de los actores identificados.

Con la información reunida, se caracterizaron y clasificaron, para conformar un mapa general de actores.

- (iii) Propuesta de **coordinación interinstitucional**.

Se realizó un relevamiento de las instancias de coordinación pública-privada que mantiene actualmente especialmente el Ministerio de Ambiente, pero también otros organismos relevantes, de forma de evaluar las posibles complementariedades.

Tomando ese insumo principal y el mapa de actores, se elaboró una propuesta preliminar de estrategia de coordinación interinstitucional para la implementación del Acuerdo de Escazú y los derechos de acceso.

- (iv) Propuesta de **objetivos generales y acciones prioritarias**, respecto de cada uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, como una contribución al Plan Nacional para la Implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales, tomando en consideración los análisis realizados.

Esas acciones deberían incluir aquellas necesarias para la armonización del marco normativo vigente con las disposiciones del Acuerdo. Asimismo, comprenderán aquellas prácticas y experiencias nacionales que podrían traducirse en iniciativas de cooperación con otros Estados Parte, para apoyar la implementación de los derechos de acceso en sus respectivas jurisdicciones.

- (v) Propuesta de **estrategia de información y participación** que permita un mayor conocimiento público de la existencia del proceso de implementación del Acuerdo, en esta primera instancia, para la elaboración de la Hoja de Ruta, generando la posibilidad de recibir comentarios y opiniones que enriquezcan las propuestas que se formulan a partir de los pasos anteriores.

Así se espera recoger iniciativas de mejora y acciones, que se incluirán en la versión final del documento.

Un insumo clave para la realización del presente informe fue la "Guía de implementación", elaborada por CEPAL, ya citada; que es un documento elaborado para contribuir a la implementación del Acuerdo de

Escazú, dándolo a conocer y proporcionando orientación, información y diferentes opciones sobre la mejor manera de implementarlo, para ayudar especialmente a los Estados Parte y al público, a comprender y cumplir plenamente las disposiciones que en él establecen.

Asimismo, se realizaron algunas instancias de diálogo con referentes relacionados con los derechos de acceso en el país, pertenecientes a dependencias del Ministerio de Ambiente y de diferentes organismos, la sociedad civil y la academia. Las mismas contaron con la presencia del punto focal nacional del Acuerdo de Escazú y representantes de CEPAL.

La primera reunión tuvo lugar el 17 de enero de 2023 y la segunda el 25 de mayo de 2023. El objetivo del primer encuentro fue dar a conocer el proceso de elaboración de la hoja de ruta y validar el diseño del mismo, hacia un plan nacional para la implementación de los derechos de acceso en Uruguay.

En la segunda reunión se presentaron los avances y dificultades en la elaboración de la línea de base, así como las primeras conclusiones del trabajo respecto a cada uno de los pilares del Acuerdo.

El 29 de junio de 2023, se realizó la presentación de los avances y la propuesta de trabajo al Plenario de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA).

En dicha instancia, se resolvió la constitución de un grupo de trabajo, de carácter interinstitucional, denominado “Grupo de Trabajo en Derechos de Acceso” (GT DD de Acceso), con el cometido de acompañar el proceso de elaboración y ejecución de la hoja de ruta, coordinando acciones para contar con una propuesta de plan nacional de implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales en Uruguay.

CAPITULO II - LÍNEA DE BASE del **marco normativo y prácticas vinculadas**

1. Introducción

El objetivo de este capítulo, es establecer la línea de base del marco normativo y de las prácticas vinculadas en Uruguay a los artículos 5 al 9 del Acuerdo de Escazú, de forma de proporcionar al Ministerio de Ambiente y a los demás interesados, un análisis de dichas normas y prácticas, como punto de partida para conocer la situación nacional respecto de las disposiciones principales del Acuerdo de Escazú.

Los artículos del Acuerdo que se analizarán son:

Artículo 5 - Acceso a la información ambiental

Artículo 6 - Generación y divulgación de Información Ambiental

Artículo 7 - Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

Artículo 8 - Acceso a la justicia en asuntos ambientales

Artículo 9 - Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

Para ello, se identificaron, recopilaron y analizaron las normas jurídicas nacionales y prácticas administrativas relacionadas, tanto de carácter general como específico.

El resultado se expone para cada uno de los párrafos de cada artículo del Acuerdo en que se consideran aplicables. Se señalan las lagunas en el marco jurídico y las prácticas y se formulan recomendaciones para subsanarlas.

Además de la Guía de Implementación ya mencionada, se utilizaron fuentes secundarias, mediante la recopilación de trabajos previos en la materia y otros documentos existentes en distintos organismos públicos y privados, más los aportes propios de la investigación realizada por las consultoras.

A continuación, se presenta un resumen del análisis realizado del marco legal y las prácticas relacionados a los artículos 5 al 9 del Acuerdo de Escazú, incluyendo un conjunto de conclusiones para cada uno.

2. Resumen del análisis respecto del articulado (artículos 5 al 9)

Artículo 5: Acceso a la información ambiental

Texto del Acuerdo	Estado de situación
<p>Artículo 5</p> <p>Accesibilidad de la información ambiental</p> <p>Párrafo 1</p> <p>Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.</p>	<p>El derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, de acceder a la información pública en general, incluyendo la información ambiental, está previsto en el artículo 3° de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008).</p> <p>Asimismo, el principio de máxima publicidad (artículo 3 del Acuerdo), está previsto en el artículo 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, según el cual los sujetos obligados deberán entregar la respuesta acorde a la solicitud que se hubiera efectuado en tiempo y forma, dando cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley y en el reglamento.</p> <p>Este desafío requiere que los equipos a cargo de proveer información ambiental cuenten con los recursos reglamentarios, humanos y técnicos adecuados para esta finalidad, y puedan relacionarse con otros ámbitos gubernamentales que tengan en su poder información en materia ambiental.</p> <p>El Acuerdo de Escazú en el apartado c) del artículo 2, define con gran amplitud el alcance de la información ambiental; lo que con otro enfoque también sucede en el artículo 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública (“Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal”).</p> <p>Sin embargo, el Acuerdo amplía el alcance de los titulares de las obligaciones sobre información ambiental, al definir la llamada “autoridad competente” (que en la ley uruguaya se conoce como “sujeto obligado”) en el apartado b) del artículo 2. Además de toda institución pública, por autoridad competente se incluye, cuando corresponda, “las organizaciones privadas, en la medida en que reciben fondos o beneficios públicos directa o indirectamente o que desempeñen funciones y servicios públicos, pero exclusivamente en lo referido a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos”. La legislación uruguaya no prevé la aplicación del derecho de acceso más allá de los organismos públicos, estatales o no.</p>

<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 2</p> <p>El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita; b) ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; y c) ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho. 	<p>En cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental, puede señalarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El derecho de solicitar y recibir información pública de las autoridades “sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita”, está expresamente previsto en el artículo 3º de la Ley de Acceso a la Información Pública. b) No existe previsión normativa que diferencie entre el otorgamiento del acceso a la información solicitada en definitiva, con una respuesta primaria sobre si posee la información que se solicita, si es que el Acuerdo realmente hace distinción; aunque algunos organismos lo realizan como práctica. c) En el ordenamiento jurídico nacional, no existe una norma que obligue a las entidades estatales a informar a los solicitantes de información pública sobre el derecho a impugnar y apelar cuando no se entrega información, y de los requisitos para ejercer este derecho; sin perjuicio de ello, la Ley de Acceso a la Información Pública prevé en su capítulo V, una acción jurisdiccional específica y abreviada de acceso a la información pública.
<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 3</p> <p>Cada Parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones.</p> <p>Párrafo 4</p> <p>Cada Parte garantizará que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta.</p>	<p>La legislación nacional no cuenta con previsiones específicas al respecto.</p> <p>Sin embargo, como forma de asistencia a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, se identifican -entre otras- algunas normas:</p> <p>Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001, que reconoce la lengua de señas como el lenguaje natural de las personas sordas.</p> <p>Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010, sobre protección integral de personas con discapacidad.</p> <p>Ley Nº 19.846, de 19 diciembre de 2019, sobre igualdad de derechos y no discriminación entre mujeres y varones.</p> <p>El artículo 88 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, reglamentado por el Decreto 406/022, de 22 de diciembre de 2022, sobre accesibilidad en entornos virtuales.</p> <p>No se encuentran otras previsiones normativas o prácticas, para que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad reciban asistencia para formular peticiones específicas.</p>

Artículo 5

Denegación del acceso a la información ambiental

Párrafo 5

Cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por estar en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las razones que en cada caso justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y recurrirla.

La Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 16, establece que el acto que resuelva sobre la petición debe emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y debe franquear o negar el acceso a la información que esté en su poder relativa a la solicitud en forma fundada.

Sin embargo, no está previsto legalmente proporcionar la información al solicitante sobre mecanismos para recurrir la negativa de dar la información.

Debe tenerse presente también, lo dispuesto por la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, que protege datos personales, que requieren previo consentimiento informado para poder ser entregados (numeral 2 del artículo 10).

Artículo 5

Párrafo 6

El acceso a la información se podrá denegar de conformidad con la legislación nacional. En los casos en que una Parte no posea un régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, podrá aplicar las siguientes excepciones:

- a) cuando hacer pública la información pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
- b) cuando hacer pública la información afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
- c) cuando hacer pública la información afecte negativamente la protección del medio ambiente, incluyendo cualquier especie amenazada o en peligro de extinción; o
- d) cuando hacer pública la información genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la prevención, investigación y persecución de delitos.

La Ley de Acceso a la Información Pública regula los casos en que el acceso a la información puede ser denegado.

En el artículo 8° se contemplan las excepciones al acceso a la información pública, las que serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definen con carácter de reservado (artículo 9°) y confidencial (artículo 10).

Como lo señala la Guía de Implementación, el Acuerdo es claro en que, cuando el régimen de excepciones exista, deberá ser el establecido por la ley, ya que el acuerdo proporciona una lista de posibles excepciones, sólo para los casos en que una Parte no tenga un régimen de excepciones establecido en la legislación nacional.

No se aplicarán las excepciones propuestas por el Acuerdo, ya que en el ordenamiento jurídico uruguayo ya se prevé un régimen de excepciones.

<p>Artículo 5 Párrafo 7</p> <p>En los regímenes de excepciones se tendrán en cuenta las obligaciones de cada Parte en materia de derechos humanos. Cada Parte alentará la adopción de regímenes de excepciones que favorezcan el acceso de la información.</p>	<p>El artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública prevé la inoponibilidad en caso de violación a los derechos humanos, estableciendo que los sujetos obligados por la Ley, no podrán invocar las reservas mencionadas cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones a los mismos.</p>
<p>Artículo 5 Párrafo 8</p> <p>Los motivos de denegación deberán estar establecidos legalmente con anterioridad y estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público, y, por lo tanto, serán de interpretación restrictiva. La carga de la prueba recaerá en la autoridad competente.</p>	<p>Los motivos de denegación están establecidos en los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública y reglamentados en el Título II del Decreto 232/010.</p> <p>El artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la Ley y las que se definan como de carácter reservado y confidencial. Asimismo, la clasificación de la información deberá ser debidamente fundada y motivada.</p> <p>En el caso del artículo 25 del Decreto 232/010 (reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública), se prevé que la información podrá clasificarse como reservada siempre que en la resolución de la autoridad, se demuestre la existencia de elementos objetivos que determinen la expectativa razonable de un daño al interés público protegido.</p>
<p>Artículo 5 Párrafo 9</p> <p>Cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad competente ponderará el interés de retener la información y el beneficio público resultante de hacerla pública, sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.</p>	<p>El ordenamiento jurídico uruguayo no posee una excepción abierta, en que se resuelva la excepción al acceso basándose en una ponderación del interés público entre retener la información y el beneficio resultante de igualmente hacerla pública. En consecuencia, no es necesario recurrir al análisis de los elementos que el Acuerdo plantea.</p>
<p>Artículo 5 Párrafo 10</p> <p>Cuando la información contenida en un documento no esté exenta en su totalidad de conformidad con el párrafo 6 del presente artículo, la información no exenta deberá entregarse al solicitante.</p>	<p>La ley y su reglamentación no establecen provisiones expresas al respecto, pero es la interpretación aceptada y la práctica administrativa proporcionar la información exenta en su totalidad y en forma disociada. Sin embargo el artículo 7º del Decreto 232/010, establece que si un documento contiene información que pueda ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.</p>

<p>Artículo 5</p> <p>Condiciones aplicables a la entrega de información ambiental</p> <p>Párrafo 11</p> <p>Las autoridades competentes garantizarán que la información ambiental se entregue en el formato requerido por el solicitante siempre que esté disponible. Si la información ambiental no estuviera disponible en ese formato, se entregará en el formato disponible.</p>	<p>La Ley de Acceso a la información Pública, en su artículo 13 habilita que el solicitante establezca en la solicitud, el soporte de información preferido, sin que dicha solicitud constituya una obligación para el organismo. El Acuerdo de Escazú resulta más enfático, pero agrega que “siempre que [el formato solicitado] esté disponible”.</p>
<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 12</p> <p>Las autoridades competentes deberán responder a una solicitud de información ambiental con la máxima celeridad posible, en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma, o en un plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna.</p>	<p>Respecto de los plazos de respuesta, la norma uruguaya es más favorable a quien solicita la información, ya que el artículo 15 de la Ley de Acceso a la información Pública prevé un plazo de respuesta de 20 días hábiles.</p> <p>Además, la norma nacional prevé el efecto positivo del silencio de la administración, de forma que en caso de no pronunciarse expresamente en el plazo legal, se considerará otorgado el acceso formulado por el solicitante.</p>
<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 13</p> <p>Cuando, en circunstancias excepcionales y de conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente necesite más tiempo para responder a la solicitud, deberá notificar al solicitante por escrito de la justificación de la extensión antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo 12 del presente artículo. Dicha extensión no deberá exceder de diez días hábiles.</p>	<p>El mismo artículo 15 de la Ley de Acceso a la información Pública faculta al organismo obligado a prorrogar el plazo por razones fundadas y por escrito, por un plazo 20 días más.</p> <p>El Acuerdo establece un plazo de respuesta de 30 días hábiles y una prórroga de 10 días hábiles más.</p> <p>En consecuencia, el plazo de prórroga a nivel nacional excede el previsto por el Acuerdo. Sin embargo, recordemos que la Ley de Acceso a la información Pública establece un plazo original de otorgamiento más breve (20 días hábiles), por lo que la combinación de ambos plazos termina igualando la norma nacional y el Acuerdo, en un plazo total de 40 días hábiles, aunque la norma nacional podría considerarse más favorable.</p>
<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 14</p> <p>En caso de que la autoridad competente no responda en los plazos establecidos en los párrafos 12 y 13 del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 8.</p>	<p>El Acuerdo remite al derecho de acceso a la justicia, cuando la autoridad competente no responda en los plazos establecidos.</p> <p>La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 23, prevé la acción de acceso a la información pública; la cual procede judicialmente contra todo sujeto obligado, cuando se negare a otorgar el acceso a la información solicitada o no se expidiera en los plazos fijados por la Ley.</p>

<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 15</p> <p>Cuando la autoridad competente que recibe la solicitud no posea la información requerida, deberá comunicarlo al solicitante con la máxima celeridad posible, incluyendo, en caso de poderlo determinar, la autoridad que pudiera tener dicha información. La solicitud deberá ser remitida a la autoridad que posea la información solicitada, y el solicitante deberá ser informado de ello.</p>	<p>En Uruguay no existe previsión normativa respecto al caso en que la autoridad no cuente con la información que se solicita, aunque en la práctica -en algunos casos- ello se indique al responder.</p> <p>Tampoco en relación a la obligación de comunicar cual autoridad la podría tener.</p>
<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 16</p> <p>Cuando la información solicitada no exista o no haya sido aún generada, se deberá informar fundadamente de esta situación al solicitante en los plazos previstos en los párrafos 12 y 13 del presente artículo.</p>	<p>El artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que una solicitud de acceso a la información pública no implica la obligación de crear o producir información que no dispongan o no tenga obligación de contar al momento de la solicitud, y en tal caso se deberá comunicar por escrito que se deniega la solicitud por inexistencia de datos en su poder.</p>
<p>Artículo 5</p> <p>Párrafo 17</p> <p>La información ambiental deberá entregarse sin costo, siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío. Los costos de reproducción y envío se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Estos costos deberán ser razonables y darse a conocer por anticipado, y su pago podrá exceptuarse en el caso que se considere que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad o en circunstancias especiales que justifiquen dicha exención.</p>	<p>La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 17, contempla que el acceso a la información sea siempre gratuito; y, únicamente su reproducción en el soporte elegido, será a costo del interesado, quien reintegrará al organismo el precio de costo del soporte, sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.</p> <p>Ninguna disposición de esta ley prevé una exención de costos de reproducción o envío en los casos en que se considere que el solicitante se encuentra en una situación de vulnerabilidad.</p>
<p>Artículo 5</p> <p>Mecanismos de revisión independientes</p> <p>Párrafo 18</p> <p>Cada Parte establecerá o designará uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las</p>	<p>La Ley de Acceso a la Información Pública, en sus artículos 19 y siguientes, crea como órgano de control en materia de acceso a la información pública a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que es a su vez un organismo desconcentrado de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).</p>

normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información. Cada Parte podrá incluir o fortalecer, según corresponda, las potestades sancionatorias de los órganos o instituciones mencionados en el marco de sus competencias.

El artículo 21 de la Ley establece dentro de sus cometidos: asesorar en el cumplimiento de la normativa; promover políticas facilitadoras del acceso informativo y la transparencia; orientar a particulares respecto al derecho de acceso a la información; realizar informes anuales respecto al estado de situación del derecho de acceso a la información; denunciar conductas violatorias a la Ley; y, solicitar a los sujetos obligados la desclasificación de la información que hubiere sido clasificada sin ajustarse a los criterios de la Ley entre otros.

A partir del año 2020, la UAIP elabora el Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INTAI), que busca medir el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario, por parte de los organismos públicos, estatales o no, alcanzados por esta normativa; pero se construye a partir de información provista por los propios sujetos obligados, incluyendo información sobre transparencia activa, transparencia pasiva y condiciones institucionales para el cumplimiento de la normativa.

Dichos órganos, no cuentan con potestades sancionatorias.

Conclusiones respecto del artículo 5 (acceso a la información ambiental)

En el artículo 5 del Acuerdo de Escazú se establecen disposiciones específicas relativas a la llamada “transparencia pasiva”, un aspecto del acceso a la información según el cual, la información ambiental se proporciona cuando un integrante del público lo solicita.

La trascendencia de la información ambiental en Uruguay aparece claramente entre las bases de la política ambiental nacional, previstas en el artículo 6° de la Ley General de Protección del Ambiente (Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000), estableciendo como uno de los principios de la gestión ambiental, “un adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier interesado” (literal F).

Más recientemente, el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, aprobado por Decreto N°222/019, de 5 de agosto de 2019, coloca la información y el conocimiento ambiental como un pilar de la dimensión de “gestión y ciudadanía ambiental”, una de las tres que conforman este instrumento estratégico para la protección del ambiente. Entre sus metas y objetivos, el acceso a información de calidad sobre el estado del ambiente y los procesos que lo afectan, se considera necesario para la toma de decisiones y la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad.

Sin embargo, es la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008), así como su norma reglamentaria (Decreto N° 232/010, de 2 de agosto de 2010), la disposición principal. Si bien son normas que regulan el acceso a la información pública en general, son plenamente aplicables también al acceso a la información ambiental.

Se ha indicado que existen casos en que no se distingue con claridad, cuando un acceso a la información pública se enfrenta datos personales protegidos por la ley, generándose eventualmente conflictos entre ambos derechos. A fin de encontrar soluciones, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) ha dictado una serie de resoluciones que aportan una guía interpretativa.

Aunque pueda entenderse que Uruguay cuenta con una legislación sólida en materia de acceso a la información pública, aún enfrenta desafíos para su adecuado conocimiento por el público y en su implementación efectiva en el área ambiental. Recordemos que el artículo 4 del Acuerdo, entre las disposiciones generales, establece que las Partes quedan obligadas a proporcionar al público información para facilitar la adquisición de conocimiento respecto de los derechos de acceso (párrafo 4), así como orientación y asistencia a personas o grupos en situación de vulnerabilidad (párrafo 5).

De igual manera, la legislación uruguaya no prevé la aplicación del derecho de acceso más allá de los organismos públicos, estatales o no, porque no quedan comprendidas las entidades privadas; mientras que el Acuerdo amplió el alcance a ciertas organizaciones privadas: “las organizaciones privadas, en la medida en que reciben fondos o beneficios públicos directa o indirectamente o que desempeñen funciones y servicios públicos, pero exclusivamente en lo referido a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos” (apartado b del artículo 2).

Otros de esos desafíos, incluyen aspectos tales como: actualizar la legislación general sobre acceso a la información a la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la OEA; superar la falta de conciencia y capacitación sobre el derecho de acceso a la información ambiental; y, la falta de recursos y capacidades en los organismos públicos obligados, para gestionar las solicitudes de información.

Asimismo, considerar la necesidad de fortalecer los organismos de control, como AGESIC y UAIP, y la posibilidad de establecer sanciones en caso de incumplimiento de la normativa existente.

Por otra parte, ciertas disposiciones previstas en el Acuerdo de Escazú, que no son específicamente contempladas en la legislación nacional general, podrían incorporarse al marco jurídico o a las prácticas administrativas aplicables específicamente a la materia ambiental. Es el caso de brindar información sobre la posibilidad de impugnar o recurrir, la remisión de la solicitud a otro organismo que pudiera

poseer la información, el padrinazo/madrinazgo y la exoneración de costos en casos especiales de vulnerabilidad, si esos casos se definen e identifican.

De algunas de las entrevistas realizadas por las consultoras han surgido recomendaciones y sugerencias respecto a la forma de comunicar la información, la accesibilidad del lenguaje, así como una instancia de mejora en el proceso de articulación de la comunicación entre organismos, la necesidad de revisión y actualización de la Ley de Acceso a la Información Pública con el fin de cubrir vacíos que se contemplan en la misma, que son aspectos no directamente relacionados con disposiciones del Acuerdo.

Artículo 6: Generación y divulgación de información ambiental

Texto del Acuerdo	Estado de situación
<p>Artículo 6</p> <p>Párrafo 1</p> <p>Garantizará que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local. Cada Parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades del Estado.</p>	<p>En cuanto a la obligación de “transparencia activa”, el régimen general deriva del artículo 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008) y artículo 38 de la reglamentación (Decreto N° 232/010).</p> <p>Dicho régimen prevé la obligación de los organismos públicos, sean o no estatales, de difundir en forma permanente y como mínimo, a través de sus medios electrónicos u otros medios, informaciones relativas a su estructura orgánica y las facultades de cada unidad administrativa; la estructura de remuneraciones, presupuesto asignado y su ejecución; concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas; los mecanismos de participación ciudadana; y, en especial, el domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.</p> <p>En particular, respecto de la información ambiental, la Ley N° 19.147, de 18 de octubre de 2013, creó el Observatorio Ambiental Nacional, buscando centralizar, organizar, compatibilizar y difundir públicamente toda la información relacionada con el estado del ambiente a nivel nacional, a través de indicadores de estado, presión y respuesta. A los efectos de la difusión, el artículo 4° remite al Sistema de Información Ambiental (SIA), localizado en la página web del Ministerio de Ambiente.</p> <p>El SIA permite visualizar en capas el territorio nacional, buscar padrones y áreas, y medir distancias. Se puede encontrar la información relativa a la política y gestión del agua, biodiversidad y servicios ecosistémicos, calidad ambiental y análisis, cambio climático, control ambiental, evaluación de impacto ambiental, promoción y desarrollo sostenible, residuos y sustancias, entre otros.</p> <p>Recordemos que el propio Acuerdo, amplía el alcance de los titulares de las obligaciones sobre información ambiental, al definir la llamada “autoridad competente” en el apartado b) del artículo 2, ya que además de toda institución pública incluye, cuando corresponda, “las organizaciones privadas, en la medida en que reciben fondos o beneficios públicos directa o indirectamente o que desempeñen funciones y servicios públicos, pero exclusivamente en lo referido a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos”. La legislación uruguaya no prevé la aplicación de las obligaciones de transparencia obligaciones transparencia activa más allá de los organismos públicos, estatales o no.</p>

Artículo 6

Párrafo 2

Las autoridades competentes procurarán que la información ambiental sea reutilizable, procesable y esté disponible en formatos accesibles, y que no existan restricciones para su reproducción o uso, de conformidad con la legislación nacional.

El ordenamiento jurídico uruguayo cuenta con el artículo 88 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, de accesibilidad web, así como las previsiones del Decreto N° 232/010, reglamentario de la Ley de Acceso a la Información Pública, que en su artículo 18 establece que la información pública deberá estar disponible en forma actualizada en el sitio web del sujeto obligado.

Asimismo, el artículo 82 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, establece que las entidades públicas deberán, como mínimo, publicar en formato abierto la información preceptuada por el artículo 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública, según corresponda en el ámbito de su competencia y de conformidad con las directrices técnicas de datos abiertos, establecidos en el Decreto 54/017, de 20 de febrero de 2017.

Artículo 6

Párrafo 3

Contará con uno o más sistemas de información ambiental actualizados, que podrán incluir, entre otros: a) los textos de tratados y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y actos administrativos sobre el medio ambiente; b) los informes sobre el estado del medio ambiente; c) el listado de las entidades públicas con competencia en materia ambiental y, cuando fuera posible, sus respectivas áreas de actuación; d) el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; e) información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y servicios ecosistémicos; f) informes, estudios e información científicos, técnicos o tecnológicos en asuntos ambientales elaborados por instituciones académicas y de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; g) fuentes relativas a cambio climático que contribuyan a fortalecer las capacidades nacionales en esta materia; h) información de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de otros instrumentos de gestión ambiental, cuando corresponda, y las licencias o permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas; i) un listado estimado de residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año; e j) información respecto

Además del Observatorio Ambiental Nacional y el Sistema de Información Ambiental, respecto de las informaciones incluidas en el Acuerdo de Escazú:

- a) La normativa nacional e internacional es publicada en forma permanente por la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), que cuenta con una base de datos especializada en normativa ambiental.
- b) El artículo 12 de la Ley General de Protección del Ambiente (Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000) prevé la elaboración de un informe sobre la situación ambiental nacional, cada 3 años.
- c) Uruguay no cuenta con un listado de instituciones con competencia en materia ambiental.
- d) No existe un listado de zonas contaminadas.
- e) Si bien es muy genérico se puede encontrar información sobre agua en DINAGUA, recursos mineros en DINAMIGE, recursos acuáticos en DINARA, etc.
- f) No existe una base de datos formal que reúna informes, estudios e información científica, técnica o tecnológica; sin embargo, la Universidad de la República cuenta con repositorios y se intenta nuclear mediante la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) de la Universidad de la República, estudios, artículos e informes relacionados con la temática ambiental que son publicados en su página web.
- g) La temática del cambio climático queda comprendida junto con los otros temas ambientales.
- h) En la página del Ministerio de Ambiente, incluyendo Observatorio Ambiental Nacional y el Sistema de Información Ambiental, se encuentra información relativa a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambientales, como las autorizaciones y evaluaciones ambientales estratégicas.

<p>de la imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales. Cada Parte deberá garantizar que los sistemas de información ambiental se encuentren debidamente organizados, sean accesibles para todas las personas y estén disponibles de forma progresiva por medios informáticos y georreferenciados, cuando corresponda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) La temática de los residuos queda comprendida junto con los otros temas ambientales. j) Sólo el Ministerio de Ambiente cuenta con un sistema unificado de recepción de denuncias, pero no informaciones unificadas o estadísticas respecto a la imposición de sanciones por parte de organismos con competencia ambiental. <p>El Informe Ambiental previsto por la Ley General de Protección del Ambiente, en su artículo 12, que dispone que el Ministerio de Ambiente, elaborará y difundirá, cada tres años, un informe sobre la situación ambiental nacional, que deberá contener información sistematizada y referenciada, organizada por áreas temáticas, podría llegar a contemplar parcialmente la disposición del inciso final del presente párrafo.</p>
<p>Artículo 6 Párrafo 4</p> <p>Cada Parte tomará medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará periódicamente.</p>	<p>Uruguay no cuenta con una norma específica que establezca un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, como instrumentos de gestión ambiental específico; lo que no implica, que no existan otros instrumentos que revelan el estado de situación del país respecto a temas específicos.</p>
<p>Artículo 6 Párrafo 5</p> <p>Cada Parte garantizará, en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, que la autoridad competente que corresponda divulgará de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños. Cada Parte deberá desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana utilizando los mecanismos disponibles.</p>	<p>En cuanto a la instancia específica y permanente de coordinación de las instituciones públicas para la gestión integral del riesgo de desastres en Uruguay, existe el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), creado por Ley N° 18.621, de 17 de noviembre de 2009. Su objetivo es proteger a las personas, los bienes de significación y el medio ambiente de fenómenos adversos que deriven, o puedan derivar, en situaciones de emergencia o desastre, generando las condiciones para un desarrollo sostenible. La Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, es el ámbito de coordinación del Poder Ejecutivo para la definición de políticas públicas de reducción de riesgo y atención a emergencias y desastres.</p> <p>El SINAE divulga información sobre alertas, así como medidas de prevención de siniestros además de su página web por medios tradicionales de comunicación como radio y televisión y en redes sociales.</p>
<p>Artículo 6 Párrafo 6</p> <p>Con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que par-</p>	<p>Excepto lo mencionado en el párrafo precedente, no se encuentra previsto este tipo de disposiciones en la normativa, ni se han constatado políticas públicas activas en este sentido.</p>

<p>tualmente les afecte, cada Parte procurará, cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos, por medio de canales de comunicación adecuados.</p>	<p>En tal sentido se sugiere medios de comunicación eficaces, que podría ser la folletería, videos explicativos, cartelera, canales audiovisuales, radios, diarios, redes sociales, etc.</p>
<p>Artículo 6 Párrafo 7</p> <p>Cada parte hará sus mejores esfuerzos por publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, que podrá contener: a) información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos, cuando ello sea posible; b) acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental; c) avances en la implementación de los derechos de acceso; y d) convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado. Dichos informes deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales. Cada Parte podrá invitar al público a realizar aportes a estos informes.</p>	<p>Uruguay dispone de la elaboración, por parte del Ministerio de Ambiente de un informe sobre la situación ambiental nacional, que se debe realizar cada 3 años y que deberá contener información sistematizada y referenciada, organizada por áreas temáticas, así se regula en la Ley General de Protección del ambiente, con un plazo menor al previsto en el Acuerdo.</p> <p>Sin embargo, la normativa no prevé que en dicho informe se reporte el avance en la implementación de los derechos de acceso, ni el relevamiento de convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado.</p> <p>Dicho informe cuenta con una instancia de participación, que podría ser limitada, en el sentido que para ingresar se debe contar con un usuario registrado.</p>
<p>Artículo 6 Párrafo 8</p> <p>Cada Parte alentará la realización de evaluaciones independientes de desempeño ambiental que tengan en cuenta criterios y guías acordados nacional o internacionalmente e indicadores comunes, con miras a evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de sus políticas nacionales ambientales en el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales. Las evaluaciones deberán contemplar la participación de los distintos actores.</p>	<p>No existe previsión legal al respecto.</p>

<p>Artículo 6</p> <p>Párrafo 9</p> <p>Cada Parte promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional.</p>	<p>Esta disposición quedaría comprendida en lo dispuesto en la Ley de Acceso a la información Pública, en la medida en que dicha información esté en manos de la administración.</p>
<p>Artículo 6</p> <p>Párrafo 10</p> <p>Asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles.</p>	<p>En línea con lo previsto en el Acuerdo, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 17.250, de 17 de agosto de 2000) dispone, en su artículo 8, que los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto. Sin embargo la normativa mencionada no tiene previsiones específicas respecto a previsiones sobre patrones de consumo y producción sostenible.</p>
<p>Artículo 6</p> <p>Párrafo 11</p> <p>Establecerá y actualizará periódicamente sus sistemas de archivo y gestión documental en materia ambiental de conformidad con su normativa aplicable, procurando en todo momento que dicha gestión facilite el acceso a la información.</p>	<p>No existen previsiones específicas al respecto, salvo las generales previstas en la Ley N° 18.220, de 20 de diciembre de 2007, sobre Sistema Nacional de Archivos, y su reglamentación (Decreto 355/012, de 31 de octubre de 2012).</p>
<p>Artículo 6</p> <p>Párrafo 12</p> <p>Cada Parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente.</p>	<p>No existe previsión legal al respecto. Sin embargo, en algunas autorizaciones ambientales de grandes proyectos se exige, por parte del Ministerio de Ambiente, que la empresa difunda información ambiental, como por ejemplo, los resultados de determinados monitoreos respecto a la calidad del aire o del agua.</p>

<p>Artículo 6</p> <p>Párrafo 13</p> <p>Cada Parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental.</p>	<p>No existen previsiones normativas al respecto.</p>
---	---

Conclusiones respecto del artículo 6 (generación y divulgación de la información ambiental)

Se han identificado normas y actividades conexas con varios de los párrafos del artículo 6 del Acuerdo de Escazú, sobre la llamada “transparencia activa”, ya que el país no cuenta con normas expresas al respecto.

Las normas principales aplicables derivan del régimen general, del artículo 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008) y artículo 38 de la reglamentación (Decreto N° 232/010), pero que presentan pocas disposiciones directamente vinculadas a la información ambiental.

Sin embargo, Uruguay cuenta con el Observatorio Ambiental Nacional (OAN), creado por la Ley N° 19.147, de 18 de octubre de 2013, mediante el cual se busca centralizar, organizar, compatibilizar y difundir información relacionada con el estado del ambiente a nivel nacional, a través del Sistema de Información Ambiental (SIA), localizados en la página web del Ministerio de Ambiente (www.ambiente.gub.uy/oan/). No obstante, el SIA parece no ser de tan fácil acceso, ya que para ingresar se debe contar con un usuario y registro previo.

Eventualmente, se requeriría diferenciar información con destino a técnicos, de aquella dirigida al público en general, de forma de mejorar la accesibilidad y facilitar la comprensión de la información ambiental por cualquier interesado.

Por otra parte, respecto a la disposición mencionada en el artículo 6.10 del Acuerdo, se podría incluir una modificación a la Ley de Relaciones de Consumo (Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000), con el fin de agregar la obligación de información en los productos y servicios, sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos sobre la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenible.

Otro caso en el que nuestro país no cuenta con una norma específica, es por ejemplo, el establecimiento de un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, aunque ya existen otros instrumentos que relevan el estado de situación del país respecto a temas específicos. Es lo que sucede con el informe sobre la situación ambiental nacional, previsto en el artículo 12 de la Ley General de Protección del Ambiente (Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000), que debe contener información sistematizada y referenciada, organizada por áreas temáticas, aun cuando su producción y difusión haya sido muy heterogénea.

Con respecto a los informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental, se desprende de las entrevistas realizadas al sector privado, que este tipo de herramientas, esencialmente voluntarias, ya son puestas en práctica por parte de algunas grandes y medianas empresas. Una situación completamente diferente se evidencia en el sector de las pequeñas y microempresas, donde el desconocimiento y la falta de recursos hacen que este tipo de iniciativas sea de muy difícil cumplimiento.

También se ha sugerido que la información pueda ser divulgada a través de medios de comunicación alternativos, como podría ser folletería, videos explicativos, cartelera, canales audiovisuales, radios, diarios, redes sociales, así como también la difusión del acceso a la información mediante campañas de bien público.

Artículo 7: Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

Texto del Acuerdo	Estado de situación
<p>Artículo 7 Párrafo 1</p> <p>Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional.</p>	<p>La participación pública en asuntos ambientales en Uruguay es un principio de política ambiental, según el literal D del artículo 6º de la Ley de General de Protección del Ambiente (Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000), que prevé que “las personas y las organizaciones representativas tienen el derecho y deber de participar” en los procesos de protección del ambiente. Sin embargo, no se ha identificado en la legislación nacional, una norma general que regule la participación pública en asuntos ambientales.</p> <p>La legislación uruguaya presenta normas específicas para determinados espacios. Ejemplo de ello es el precepto constitucional (inciso segundo del artículo 47 de la Constitución de la República), que dispone que los usuarios y la sociedad civil, participarán de todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades básicas.</p> <p>A su vez, la Ley de Protección del Ambiente Nº 17.283 de 12 de diciembre de 2000, que en su artículo 6º, establece como principio de la política nacional ambiental, que la protección del ambiente constituye un compromiso que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que las personas y las organizaciones tienen el derecho y deber de participar en ese proceso (literal D).</p> <p>Por otro lado, existen normas específicas que prevén espacios de participación de diferente tipo; ámbitos permanentes en procesos de elaboración de políticas o transitorios en procesos de evaluación y autorización de proyectos.</p> <p>Entre ellas, podemos señalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Ley de creación del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990), que creó la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA), como un ámbito de asesoramiento y coordinación interinstitucional e intersectorial; que se replicó en el ordenamiento territorial (COAOT, en la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008) y en los recursos hídricos (COASAS, por Decreto 450/006). - La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994) y su reglamento (Decreto Nº 349/005, de 21 de setiembre de 2005), así como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308, de 18 de junio de

	<p>2008), prevén la puesta de manifiesto y la celebración de audiencias públicas como instancias obligatorias de participación para la autorización de proyectos de cierta significación ambiental o la elaboración de instrumentos de planificación territorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Ley de creación el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000) y su reglamentación (Decreto Nº 52/005), prevén una Comisión Nacional y las Comisiones Asesoras Específicas, de cada área protegida, integradas por delegados de varios ministerios, Intendencias, academia y sociedad civil. - La Ley de Política Nacional de Aguas (Ley Nº 18.610, de 2 de octubre de 2009) prevé la participación en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, reglamentando la disposición constitucional. Para ello, crea Comisiones de Cuenca y Consejos Regionales de Recursos Hídricos, presididos por el Ministerio de Ambiente e integrados en forma paritaria, por representantes del Gobierno, usuarios y sociedad civil. - La Ley de Riego con destino agrario (Ley Nº 16.858, de 3 de setiembre de 1997), crea las Juntas Regionales Asesoras de Riego, integradas por representantes del sector estatal y representantes de los regantes y de los propietarios de la zona, designados por comisiones o sociedades de fomento. <p>Es necesario contar con órganos ambientales capacitados en la comprensión de la amplitud de la participación, con diferentes modalidades y mecanismos participativos, de acuerdo a las características y necesidades del proyecto y de la comunidad eventualmente impactada.</p> <p>Ha surgido de las entrevistas realizadas la importancia de asegurar la participación de las personas y comunidades que podrían ser directamente afectadas por las tomas de decisiones, así como la revisión de los espacios de participación ya previstos.</p>
<p>Artículo 7</p> <p>Párrafo 2</p> <p>Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, exámenes o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.</p> <p>Párrafo 3</p>	<p>La normativa identificada es muy similar a la indicada para el párrafo anterior. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (Decreto Nº 349/005), así como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, prevén la puesta de manifiesto y la celebración de audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de proyectos de cierta significación ambiental o la elaboración de instrumentos de planificación territorial y la aprobación de la correspondiente evaluación ambiental estratégica.</p> <p>Asimismo, el artículo 72 de la Ley de Ordenamiento Territorial, dispone que las instituciones públicas promoverán la participación pública utilizando como mínimo, los mecanismos específicos que se establecen en dicha Ley, pudiendo toda persona interesada realizar propuestas, con la debida fundamentación, a los</p>

<p>Cada Parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones, revisiones, exámenes o actualizaciones distintos a los mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.</p>	<p>efectos de su consideración por las instituciones públicas competentes en los instrumentos de ordenamiento territorial.</p> <p>Por su parte, La Ley de Política Nacional de Aguas prevé Comisiones de Cuenca y Consejos Regionales de Recursos Hídricos, presididos por el Ministerio de Ambiente e integrados en forma paritaria, por representantes del Gobierno, usuarios y sociedad civil.</p> <p>Finalmente, el Reglamento de Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados, prevé en su artículo 6º (Decreto 353/008, de 21 de julio de 2008, Participación) que, cuando se trate de solicitudes de autorización de nuevos eventos transgénicos, se deberá poner en conocimiento de la población a través de canales de difusión pública y realizar una consulta a través de puesta de manifiesto, audiencia pública y otros mecanismos.</p>
<p>Artículo 7 Párrafo 4</p> <p>Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.</p>	<p>La norma que prevé instancias de participación desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, es la que regula la Evaluación de Impacto Ambiental, al establecer la puesta de manifiesto en la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), para aquellas actividades, construcciones u obras que requieren VAL para poder tramitar la solicitud de Autorización Ambiental Previa.</p> <p>Aun así, el Ministerio de Ambiente ha entendido necesario llevar adelante otras instancias no previstas legalmente, como los “Diálogos Ciudadanos”, para algunos proyectos relevantes que requieren especialmente instancias participativas complementarias pero previas.</p> <p>Pero en términos generales Uruguay no cuenta con otras herramientas normativas que prevean la participación temprana en la toma de decisiones y es discutible el momento en que la participación se introduce en los procedimientos.</p> <p>En ese sentido, se han verificado reclamos de la sociedad civil solicitando se asegure la participación desde instancias tempranas del proceso de toma de decisión.</p>
<p>Artículo 7 Párrafo 5</p> <p>El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que este participe en forma efectiva.</p>	<p>En términos generales, las normas que prevén la participación no establecen plazos específicos para el desarrollo de los mecanismos de participación, salvo la puesta de manifiesto público.</p> <p>Las normas usualmente establecen el momento del procedimiento en el que se puede convocar a la participación, aunque no siempre prevén un plazo para ello.</p>

<p>Artículo 7 Párrafo 6</p> <p>El público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, como mínimo sobre: a) el tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico; b) la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas; c) el procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública; y d) las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos para solicitar la información.</p>	<p>No se ha identificado normativa que incluya los aspectos puntualizados en el Acuerdo, aunque en la práctica administrativa, varios de esos aspectos son incluidos en las convocatorias y publicaciones de puesta de manifiesto.</p>
<p>Artículo 7 Párrafo 7</p> <p>El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación.</p>	<p>Existe la obligación de que toda decisión de la administración debe estar motivada, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan (artículo 123 del Decreto 500/991).</p> <p>En los procesos de participación existentes, las decisiones son publicadas, dependiendo del procedimiento de que se trate, y el público puede en general acceder a ellas, así como a sus motivos y fundamentos, sin embargo no existe la obligación de exponer el modo en que se tuvieron en cuenta las observaciones del público.</p>
<p>Párrafo 8</p> <p>Cada Parte velará por que, una vez adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado de ella y de los motivos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones. La decisión y sus antecedentes serán públicos y accesibles.</p>	<p>En las resoluciones de autorización del régimen de evaluación de impacto ambiental, se incluyen los datos de la puesta de manifiesto, si existieron presentaciones y en qué consistieron.</p>

<p>Artículo 7</p> <p>Párrafo 9</p> <p>La difusión de las decisiones que resultan de las evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de toma de decisiones ambientales que involucran la participación pública deberá realizarse a través de medios apropiados, que podrán incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva y rápida. La información difundida deberá incluir el procedimiento previsto que permita al público ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes.</p>	<p>Las resoluciones del régimen de evaluación de impacto ambiental son incluidas en el Observatorio Ambiental Nacional y difundidas a través del Sistema de Información Ambiental. Sin embargo se ha constatado que el Sistema de Información Ambiental puede no ser de fácil acceso, ya que para ingresar en algunos casos, requiere usuario y registro previo.</p> <p>La legislación de ordenamiento territorial prevé que todos los instrumentos de planificación previstos en la Ley, deberán ser publicados en el Diario Oficial. Adicionalmente, los instrumentos de ordenamiento territorial son incluidos en el Inventario nacional de ordenamiento territorial, llevado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y disponible públicamente.</p> <p>En cuanto a la inclusión del procedimiento previsto para que el público pueda ejercer las acciones administrativas y jurisdiccionales, ello no se encuentra previsto normativamente ni se han relevado prácticas administrativas al respecto.</p>
<p>Artículo 7</p> <p>Párrafo 10</p> <p>Cada Parte establecerá las condiciones propicias para que la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público.</p>	<p>Pese a que en el ordenamiento jurídico uruguayo se prevén ámbitos de participación permanentes y generales, así como ámbitos que son específicos, tales como en materia de aguas o de ordenamiento territorial y ámbitos de participación eventuales para casos concretos, no se encuentra un amparo normativo que responda a esta obligación del Acuerdo.</p>
<p>Artículo 7</p> <p>Párrafo 11</p> <p>Cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad pública velará por que se facilite su comprensión y participación.</p>	<p>No existen en nuestro país previsiones respecto al lenguaje, considerando que existe un idioma oficial que es el español y que no se hablan otras lenguas propias del país. Lo anterior es sin perjuicio de las disposiciones sobre el lenguaje de señas.</p>

<p>Artículo 7</p> <p>Párrafo 12</p> <p>Cada Parte promoverá, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, la participación del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental, de acuerdo con las reglas de procedimiento que para dicha participación prevea cada foro. Asimismo, se promoverá, según corresponda, la participación del público en instancias nacionales para tratar asuntos de foros internacionales ambientales.</p>	<p>No se han constatado provisiones normativas al respecto.</p> <p>En materia de cambio climático, es donde se ha identificado mayor participación del público por los mecanismos previstos en las propias normas internacionales.</p>
<p>Artículo 7</p> <p>Párrafo 13</p> <p>Cada Parte alentará el establecimiento de espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los ya existentes, en los que puedan participar distintos grupos y sectores. Cada Parte promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda.</p> <p>Párrafo 14</p> <p>Las autoridades públicas realizan esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarse de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación.</p> <p>Párrafo 15</p> <p>En la implementación del presente Acuerdo, cada Parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales</p>	<p>No se han identificado provisiones normativas al respecto.</p>

<p>Artículo 7 Párrafo 16</p> <p>La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y promoverá acciones específicas para facilitar su participación.</p>	<p>No se prevén mecanismos específicos para fomentar su participación.</p>
<p>Artículo 7 Párrafo 17</p> <p>En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones ambientales a los que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, se hará pública al menos la siguiente información: a) la descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesto; b) la descripción de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo; c) la descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos; d) un resumen de los puntos a), b) y c) del presente párrafo en lenguaje no técnico y comprensible; e) los informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto o actividad de que se trate; f) la descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, cuando la información esté disponible; g) las acciones de monitoreo de la implementación y de los resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental.</p>	<p>El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (Decreto 349/005), regula estos aspectos.</p> <p>Sin embargo, en lo que refiere a la descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, no se encuentra previsto en la ley, aunque se han identificado prácticas administrativas que las incluyen en el estudio de impacto ambiental.</p>

Conclusiones respecto del artículo 7 (participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales)

La participación pública en asuntos ambientales en Uruguay es un principio de política ambiental (literal D del artículo 6° de la Ley General de Protección del Ambiente), reconociendo que “las personas y las organizaciones representativas tienen el derecho y deber de participar” en esos asuntos. Sin embargo, no se ha identificado en la legislación nacional, una norma que regule la participación pública en asuntos ambientales con carácter general, sino que cada espacio de participación se prevé en una norma diferente y específica, con prácticas y resultados muy diferentes.

De la revisión normativa y de las prácticas y opiniones relevadas, surgen determinadas acciones que podrían contribuir a mejorar el sistema de participación, en la medida en que, por ejemplo, ofrezcan garantías que las opiniones y propuestas de las personas son consideradas, más allá que sean recogidas; y, prevean una forma de devolución por parte de la autoridad competente, que explicita las razones de recoger o las opiniones y propuestas recibidas.

Es importante dar seguimiento a esos criterios ya que son la base indispensable para que la participación sea eficaz y no sea vista como una instancia de información unidireccional, en lugar de un ámbito de intercambio bidireccional.

Eso podría implicar asegurar que los resultados de las consultas públicas, audiencias públicas y otros mecanismos de participación, sean considerados y tomados en cuenta en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones, argumentando en cada caso y que no queden solo como un ejercicio simbólico.

La participación efectiva de todas las personas es un desafío fundamental, incluyendo la de aquellos grupos vulnerables que enfrentan barreras de acceso, como personas con discapacidad, personas mayores, personas de bajos ingresos o personas que viven en zonas rurales. Para ello, es necesario que se adopten medidas especiales para asegurar su participación plena y efectiva, respetando su diversidad y garantizando la igualdad de oportunidades.

Además, es importante seguir fortaleciendo el uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos de participación del público, asegurando que sean accesibles, inclusivas y transparentes. Es conocida la amplia cobertura de servicios on line que existen en el país, pero ello también implica asegurar que las plataformas en línea sean accesibles para todas las personas, incluyendo a aquellas con discapacidad, y que la información sea clara, completa y comprensible para el público en general. También es importante garantizar la protección de datos personales y la seguridad de la información en los procesos de participación del público en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, se señaló reiteradamente en las entrevistas realizadas, que existe un cierto analfabetismo digital de los adultos, en particular en el interior del país, por lo que se sugiere mayores instancias presenciales, con folletería explicativa muy clara. También el uso de los medios tradicionales de comunicación como radios locales, prensa escrita, televisión, cartelería, etc.

Por otro lado, es necesario seguir promoviendo en la sociedad uruguaya, la cultura de la participación, fomentando la conciencia del público sobre la importancia de participar en el proceso de toma de decisiones públicas y promoviendo la participación activa y responsable de las personas en la vida democrática del país. Esto implica promover la educación ciudadana y la formación de las personas desde temprana edad, fomentar la participación en organizaciones de la sociedad civil, y promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades gubernamentales y sociales.

En el ordenamiento jurídico uruguayo existen varias normas específicas que contemplan el acceso a la participación en la toma de decisiones, tanto en proyectos o actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente y la salud, así como en las políticas y decisiones adoptadas por el Estado.

Sin perjuicio de ello, se podría establecer una norma general que determine criterios generales o reglas mínimas para la participación del público, especialmente las consultas y audiencias públicas, con apego a los estándares del Acuerdo de Escazú. Es decir, una guía o reglamentación del proceso de participación, que regule la cantidad de instancias mínimas, la representatividad considerando los actores involucrados, así como la recepción de aportes y una evaluación y devolución debidamente fundadas, todo de conformidad con las disposiciones del Acuerdo.

Para lo descrito anteriormente es fundamental contar con personal preparado, así como los recursos económicos para llevar adelante estas instancias participativas, que requieren disponibilidad material y habilidades de diálogo y negociación, razones por las cuales las acciones de capacitación y sensibilización también son indispensables.

Artículo 8: Acceso a la justicia en asuntos ambientales

Texto del Acuerdo	Estado de situación
<p>Artículo 8 Párrafo 1</p> <p>Cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso.</p>	<p>Los artículos 12 y 18 de la Constitución de la República, así como los Pactos Internacionales ratificados por el país, establecen las garantías del debido proceso, siendo las leyes las que fijarán el orden y formalidades de los juicios.</p> <p>La protección del derecho de acceso a la justicia tiene rango constitucional en Uruguay, la Constitución de la República en su artículo 30 establece que todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.</p> <p>Sin embargo, no se identificó una disposición específica referida a asuntos ambientales.</p>
<p>Artículo 8 Párrafo 2</p> <p>Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.</p>	<p>En materia de acceso a la justicia, en relación a la información ambiental, la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008), en su artículo 22, establece que toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés.</p> <p>Los mecanismos jurisdiccionales o administrativos para impugnar y apelar, con respecto al fondo y al procedimiento de cualquier decisión, acción u omisión relacionada específicamente con la participación pública en el proceso de toma de decisiones sobre asuntos ambientales, no se prevé normativamente en forma específica, siendo aplicable el régimen general.</p> <p>En cuanto al acceso a la justicia en sede jurisdiccional específicamente en materia ambiental pero no exclusivo a los derechos de acceso, son aplicables las previsiones del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), el cual creó lo que se denomina “representación de los intereses difusos”.</p> <p>Otro mecanismo judicial de acceso a la justicia que puede utilizarse en asuntos ambientales, es el previsto en la Ley Nº 16.011 de 19 de diciembre de 1988, por el cual se regula la acción de amparo, como procedimiento abreviado para el amparo de derechos constitucionales protegidos, estableciendo múltiples requisitos de admisibilidad.</p> <p>Por su parte en el ámbito administrativo, el Decreto 500/991 que regula el Procedimiento Administrativo, en su artículo 117, dis-</p>

	<p>pone que todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República y regula el procedimiento administrativo recursivo de actos administrativos.</p>
<p>Artículo 8</p> <p>Párrafo 3</p> <p>Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental; b) procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional; d) la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente; e) medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba; f) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y, g) mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. 	<p>Respecto de cada uno de los apartados, en la legislación uruguaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) No existen órganos jurisdiccionales especializados en materia ambiental en el país. Así como tampoco están previstas Fiscalías especializadas en materia ambiental, aunque cuenta con un ministerio competente en materias ambientales desde 1990 (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente primero, Ley N° 16.112, de 30 de mayo de 1990; y, actualmente, Ministerio de Ambiente, Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020). b) Los procedimientos jurisdiccionales deben ser efectivos, oportunos, públicos, transparentes e imparciales según las disposiciones del Código General del Proceso; sin embargo, en cuanto a los costos, varias han sido las opiniones respecto al alto costo de la prueba técnica y pericial en asuntos de materia ambiental. Sin perjuicio de ello, existen diversos mecanismos que pueden llegar a atenuar los costos, como el beneficio de la "auxiliatoria de pobreza" o la posibilidad del magistrado de recurrir a "institutos, colegios o academias" que pueden ser públicos, prestando asistencia al tribunal sin costo (artículo 178 CGP). c) El artículo 42 del Código General del Proceso establece la posibilidad de una legitimación amplia en defensa del medio ambiente y, en general, otras cuestiones que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, a través de la representación de los intereses difusos. A esos efectos, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. <p>En el ámbito contencioso-administrativo, al legitimado se le requiere un interés directo, personal y legítimo (artículo 309 de la Constitución de la República), por lo que se ha sugerido realizar una interpretación que habilite una legitimación más amplia en asuntos ambientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Con carácter general, el Código General del Proceso contempla que las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier proceso, tanto contencioso como voluntario, por el tribunal que esté conociendo o deba conocer en el asunto. <p>Por otra parte, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994) en su artículo 4°, establece que quien provoque degradación, destrucción o contaminación del medio ambiente, será civilmente responsable y podrá tener la obligación de recomponer el ambiente. A su vez, en su artículo</p>

8º prevé que, en cualquier momento durante la realización de una actividad, construcción u obra de las alcanzadas por este régimen, el Poder Ejecutivo podrá disponer, por resolución fundada, su suspensión.

También, la Ley General de Protección del Ambiente (Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000), que en su artículo 14 dispone medidas para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en las demás normas de protección del ambiente, faculta al Ministerio de Ambiente a disponer la suspensión preventiva de la actividad presuntamente peligrosa o adoptar medidas cautelares de intervención de los objetos o del producto de la actividad presuntamente ilícita y constituir secuestro administrativo si así lo considera necesario, cuando según la naturaleza de la infracción pudiera dar lugar al decomiso de los mismos.

Finalmente, la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008), en su artículo 25, faculta a los gobiernos departamentales, a partir del inicio de la elaboración de los avances de los instrumentos de planificación, establecer fundamentalmente como medida cautelar, la suspensión de las autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos o de oportunidad.

e) En la legislación uruguaya no existen reglas especiales en materia de prueba para los procesos ambientales y tampoco normas que habiliten expresamente la carga probatoria dinámica.

Se requeriría norma expresa para aplicar la inversión de la carga de la prueba, ya que el ordenamiento jurídico general se rige en materia de prueba por el Código General del Proceso, que en su artículo 139 dispone que corresponde probar a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión; así como a quien contradiga la pretensión de su adversario, que tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.

Sin perjuicio de lo expuesto, existe doctrina en la materia que interpreta que la teoría de las cargas probatorias dinámicas ya se encontraría prevista en el artículo 139.2 del CGP, por entender que los deberes de colaboración, veracidad y buena fe, permiten reclamarle la prueba a la parte que encuentre en mejores condiciones de presentarla.

f) En cuanto a mecanismos para ejecutar y hacer cumplir oportunamente las decisiones jurisdiccionales y administrativas, la Ley General de Protección del Ambiente, en su artículo 16 prevé la posibilidad de la imposición judicial de astreintes, cuando el responsable se demorare o resistiere a dar cumplimiento a la recomposición, reducción o mitigación del daño ambiental causado; así como proceder a la recomposición de oficio, siendo de cargo del infractor los gastos que ello ocasione.

Por su parte, el Código General del Proceso, en su artículo 220, regula los efectos de la cosa juzgada en procesos promovidos en representación de intereses difusos, disponiendo que la senten-

	<p>cia dictada en estos procesos (artículo 42) tendrá eficacia general, salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso, otro legitimado podrá volver a plantear la cuestión en otro proceso.</p> <p>g) Como se mencionara, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 4 establece la posibilidad de imponer la obligación de recomposición a quien provoque depreciación, destrucción o contaminación del medio ambiente.</p> <p>Así como la Ley General de Protección del Ambiente, en su artículo 16, prevé la recomposición de oficio en caso que el responsable del daño se demore o resistirse a dar cumplimiento a la recomposición, reducción o mitigación, además de la posibilidad de solicitar judicialmente astreintes o hacerlo de oficio imponiendo los cargos de los gastos al infractor.</p> <p>La Ley de creación del Ministerio de Ambiente (Ley Nº 19.889), en su artículo 294 establece la potestad de inspección y sanción de ese Ministerio, y modifica el monto de las sanciones pecuniarias en el artículo 295, estableciendo que los infractores serán pasibles de multas que podrán oscilar entre 10 y 100.000 Unidades Reajustables (entre 400 y 4 millones de dólares, aproximadamente). El producido de las multas no tiene como destino las rentas generales del Estado, sino el Fondo Nacional de Medio Ambiente creado por el artículo 454 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.</p> <p>Un conjunto de sanciones diferentes de las multas, se prevén en el artículo 15 de la Ley General de Protección del Ambiente, que van desde el apercibimiento y la difusión pública, hasta el decomiso, la suspensión y la clausura.</p> <p>No se prevé la atención a las personas afectadas.</p>
<p>Artículo 8</p> <p>Párrafos 4</p> <p>Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada Parte establecerá:</p> <p>a) medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia;</p> <p>b) medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo;</p> <p>c) mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y</p> <p>d) el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de ese derecho.</p>	<p>Las disposiciones de este párrafo no se encuentran enumeradas normativamente a texto expreso en la legislación uruguaya. Sin embargo, encontramos previsiones normativas tales como:</p> <p>La Constitución de la República, en su artículo 254, dispone que la justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. En los pleitos en que tal declaración se hubiere hecho a favor del demandante, el demandado gozará del mismo beneficio hasta la sentencia definitiva, la cual lo consolida si declara la ligereza culpable del demandante en el ejercicio de su acción. -</p> <p>Las defensorías públicas y la auxilioria de pobreza son herramientas que complementan este principio, así como la asistencia gratuita brindada en ciertos casos por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.</p> <p>No existen medios especiales de divulgación del derecho de acceso a la justicia o de las decisiones jurisdiccionales o administrativas en materia ambiental.</p>

<p>Párrafos 5</p> <p>Atender las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda.</p>	
<p>Artículo 8</p> <p>Párrafo 6</p> <p>Cada Parte asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito.</p> <p>Párrafo 7</p> <p>Cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias.</p>	<p>Las decisiones jurisdiccionales y administrativas se consignan por escrito.</p> <p>En cuanto a mecanismos alternativos de solución de controversias, el Poder Judicial y determinados gobiernos departamentales cuentan con centro de conciliación y mediación o defensoría del vecino, que realizan mediación también en temas ambientales especialmente locales o vecinales, como por ejemplo en cuestiones relacionadas con ruidos molestos o residuos.</p> <p>Por otro lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), tiene por cometido la defensa, promoción y protección -en toda su extensión- de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el Derecho internacional. En ese sentido realiza acciones para la defensa de los derechos humanos vulnerados, representando y asistiendo al público en la materia.</p>

Conclusiones respecto del artículo 8 (acceso a la justicia)

Varias de las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, tales disposiciones se encuentran dispersas y en algunos casos es necesario realizar una actualización de la normativa, así como en otros es necesaria la adopción de instrumentos normativos e instituciones que contemplen los preceptos recomendados en el Acuerdo.

Ejemplo de ello es la necesidad de contar con mayor capacitación para los órganos **jurisdiccionales** y administrativos, así como la elaboración de normativa que contemple los aspectos generales y particulares de los procesos ambientales, incluyendo los temas procesales centrales, como son las disposiciones sobre legitimación, prueba, medidas efectivas de ejecución de las decisiones judiciales, así como rever el mecanismos de reparación. Eso se podría implementar a través de una norma que regule los procesos colectivos.

La especialización de los operadores jurídicos en asuntos ambientales y democracia ambiental es necesaria. En función de no existir órganos **jurisdiccionales** especializados en la temática, se hace imprescindible fortalecer la formación y especialización de operadores jurídicos (jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras públicos y abogados litigantes), así como del personal técnico que interviene (por ejemplo, peritos médicos y científicos). También se requiere incrementar los recursos humanos y económicos destinados para que estos funcionen en forma adecuada y eficaz.

En cuanto a la legitimación para accionar en materia contenciosa-administrativa (ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo), se podría analizar una eventual reinterpretación del concepto de "interés

directo, personal y legítimo”, para habilitar el accionar con una legitimación amplia en materia de intereses difusos, así como una revisión y actualización de las reglas del procedimiento administrativo, que tienda a disminuir los plazos de análisis y toma de decisión; sin desmedro de las exigencias constitucionales previstas en el artículo 309 de la Constitución de la República.

Asimismo, a nivel universitario, la formación jurídica curricular obligatoria no incluye por lo general la temática específica del ambiente en su especialidad; incluso la reciente reforma del plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UDELAR, no la incluyó como materia obligatoria, siendo una asignatura opcional y cursos de posgrado.

En general los costos procesales, relativos a la producción de la prueba, pueden ser elevados. Para acreditar el nexo causal en materia probatoria es necesario contar con pericias e informes técnicos que resultan costosos y específicamente en temas ambientales no existen mecanismos gratuitos o accesibles económicamente para personas vulnerables. Las defensorías públicas y los consultorios jurídicos universitarios no cuentan con especialización en temas ambientales y aunque han ejercido defensa en materia ambiental, ha sido en un número limitado de casos.

La inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, no se prevén específicamente en las normas procesales uruguayas, por lo que quizás se deberían revisar las reglas de procedimiento para incorporar estos institutos.

Artículo 9: Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales

Texto del Acuerdo	Estado de situación
<p>Artículo 9 Párrafo 1</p> <p>Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.</p>	<p>La Constitución de la República garantiza, la libertad de expresión y el derecho de reunión. Sin perjuicio de ello, no se identificaron medidas particulares a efectos de garantizar un entorno propicio para que las personas ejerzan defensas ambientales, ni tampoco razones evidentes para adoptarlas.</p>
<p>Artículo 9 Párrafo 2</p> <p>Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.</p>	<p>Aunque como se señaló, no se identificaron normas específicas, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, dentro de sus cometidos tiene el deber de defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado. Estos derechos están reconocidos en la Constitución de la República y en las normas y tratados internacionales suscriptos por Uruguay. Además, recibe denuncias y observa que las normas, las prácticas administrativas del Estado, las políticas públicas y los tratados internacionales estén debidamente armonizados y contribuyan a una mejor protección de los derechos humanos.</p> <p>Tal vez, una práctica relacionada que puede señalarse relacionada aquí, es el programa del Ministerio de Ambiente denominado "Red de Promotores Ambientales", de alcance nacional.</p>
<p>Artículo 9 Párrafo 3</p> <p>Tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el Acuerdo.</p>	<p>Al no establecerse normas específicas de protección respecto a los defensores ambientales, son de aplicación -con carácter general- las disposiciones del Código Penal (Ley N° 9.155 de 4 de diciembre de 1933), cuando las acciones en su contra constituyan delitos.</p>

Conclusiones respecto del artículo 9 (defensores de derechos humanos en asuntos ambientales)

Uruguay es reconocido como un país con altos estándares de libertad de expresión y protección a los derechos individuales.

De los relevamientos realizados con distintos actores de la sociedad civil, surge que no hay una percepción de inseguridad en el ámbito de sus actuaciones, salvo algunos casos muy puntuales. Dado que no existe en el Acuerdo una definición del alcance del término “personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales”, a los efectos de visualizar y lograr la protección del estatus que dicho reconocimiento conlleva, ha de considerarse incluida a *“cualquier persona o grupo de personas que trabajen para promover y proteger los derechos humanos, desde organizaciones e instituciones hasta personas que trabajen en sus comunidades locales (...) También pueden ser funcionarios públicos”*, agregando, *“Para ser considerado defensor o defensora de los derechos humanos no es necesario cumplir ningún requisito especial ni formal”* (Guía de Implementación, cit., pág. 198).

Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo al contexto global sobre el tema, así como la difusión de Uruguay como un país de acogida de defensores ambientales extranjeros, sería oportuno contar con un protocolo o norma específica que recoja los criterios e instrumentos del Acuerdo. Una alternativa podría desarrollarse a través de ACNUR, la agencia para los refugiados de Naciones Unidas analizando la flexibilidad para dar acogida cuando se trate de personas perseguidas por fines diferentes a los políticos.

Finalmente, pese a que el ordenamiento nacional, en especial el Código Penal, prevé sanciones por la comisión de delitos referidos a los derechos consagrados constitucionalmente, no se cuenta con criterios o normas de carácter preventivo, identificatorias y específicas ante situaciones en las que las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se encuentren involucrados.

CAPITULO III - MAPA DE ACTORES

1. Introducción

La implementación del Acuerdo de Escazú será un proceso progresivo, de largo plazo, que debe adecuarse a las capacidades nacionales. Para ello, uno de los desafíos será crear e implementar un sistema de coordinación que permita a los diversos actores de la sociedad civil, academia, sector privado, organizaciones locales y otros, vincularse a la implementación de Escazú y relacionarse con los actores públicos.

De esta forma la Hoja de Ruta elaborada para apoyar la implementación del Acuerdo de Escazú contempla la definición de un mapa de actores (paso 2 de la Hoja de Ruta), como insumo relevante para la elaboración del paso sobre coordinación interinstitucional (paso 3).

2. Objetivo

Este capítulo identifica los actores vinculados, tanto públicos como privados, sociales (organizaciones de la sociedad civil, academia, gremiales), con el objetivo de involucrarlos en la elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Implementación que se propone.

3. Metodología de trabajo

Cuando se hace referencia al mapa de actores del sector estatal o público, nos referimos a la identificación de aquellas entidades gubernamentales o estatales cuya participación es necesaria para la implementación del Acuerdo, según sus competencias, cometidos y atribuciones.

En cambio, con relación al mapa de actores del sector privado, nos referimos a la identificación de aquellas organizaciones del ámbito no gubernamental, genéricamente integradas bajo el concepto de “público” según el Acuerdo, cuya participación es clave para asegurar o facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, atendiendo a sus fines o al rol que les cabe en diferentes ámbitos sociales.

Para concretar esa identificación se consultaron bases de datos de fuentes secundarias, complementadas con el relevamiento realizado para estos efectos. Obviamente ello fue realizado en un momento y con el tiempo disponible, por lo que podría requerir actualizaciones y complementaciones posteriores.

Se incluyen actores públicos, sociales y privados que *a priori* tienen incidencia o tienen vínculo con alguno de los pilares del Acuerdo.

Se realizaron intercambios con el Ministerio de Ambiente, como punto focal nacional del Acuerdo, a los efectos de completar datos para identificación de los actores y de las personas de contacto en cada organización, pero también se tuvieron en cuenta aquellos otros actores sugeridos por los propios integrantes del público en las entrevistas realizadas.

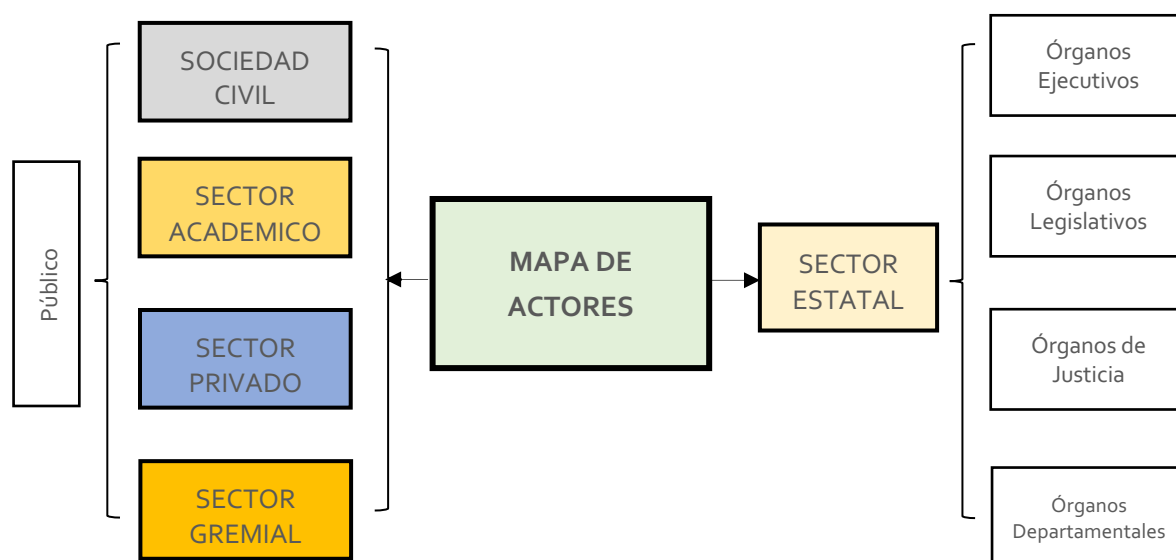
4. Identificación y clasificación de actores

A. MAPA DE ACTORES DEL SECTOR ESTATAL

Para la elaboración del mapa de actores del sector estatal, se identificaron los organismos públicos, según sus competencias, cometidos y atribuciones, clasificándolos en dos grupos: organismos directamente competentes en derechos de acceso en asuntos ambientales, por una parte, y, por otra parte, organismos con competencias en materias ambientales.

En primer lugar, se seleccionaron los **organismos directamente competentes en derechos de acceso en asuntos ambientales**, entendiéndolos como autoridades en la materia en el ámbito nacional, con facul -

Representación general del mapa de actores



tades de regulación o control en los pilares del Acuerdo. Sus cometidos pueden no ser solamente o específicamente ambientales, pero sí están directamente relacionadas con la información o participación pública o el acceso a la justicia en general.

No deben confundirse estos actores estatales con las “autoridades competentes”, definidas por el Acuerdo (apartado b) del artículo 2º) como los titulares de las obligaciones de informar o “sujetos obligados” según el concepto que utiliza la legislación uruguaya (artículos 4º y 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008), como se explicó al analizar el párrafo 2 del artículo 5º del Acuerdo.

Incluso, estos organismos pueden no ser titulares de obligaciones o sujetos obligados respecto de los derechos de acceso en el ámbito nacional, pero pueden tener gran relevancia respecto de esos derechos.

Este primer grupo de entidades gubernamentales tendrán un rol fundamental y estratégico en la implementación del Acuerdo de Escazú, en cuanto tienen facultades de orientación o dirección para la aplicación y efectividad de los derechos de acceso en general o, por lo menos, en materia ambiental.

GRUPO 1		
Organismos públicos directamente competentes en derechos de acceso en asuntos ambientales		
Organismo	Área/departamento específico	Competencias en derechos de acceso
ORGANOS en el AMBITO EJECUTIVO		
Ministerio de Ambiente (MA)	Área Jurídica	Ejerce como punto focal nacional del Acuerdo de Escazú dentro de la autoridad nacional Responsable de transparencia pasiva

Organismo	Área/departamento específico	Competencias en derechos de acceso
	Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA)	Actúa como ámbito de coordinación y asesoramiento en materia de formulación, ejecución y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente
	Observatorio Ambiental Nacional (OAN)	Reúne y disponibiliza la información ambiental del MA y de los demás organismo públicos
Presidencia de la República	Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC)	Es el órgano garante del derecho de acceso a la información pública Controla la implementación de la Ley N° 18.381 en los sujetos obligados
ORGANOS en el AMBITO LEGISLATIVO		
Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)		Defiende, promueve y protege los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado.
ORGANOS en el AMBITO de la JUSTICIA		
Poder Judicial (PJ)	Suprema Corte de Justicia (SCJ)	Es el órgano jerarca del Poder Judicial, aunque sólo entiende en procesos que sean llevados a casación o que pretendan la inconstitucionalidad de una ley nacional o un decreto departamental
Ministerio Público y Fiscal	Fiscalía General de la Nación (FGN)	Ejerce las funciones del Ministerio Público y Fiscal Dirige la investigación de crímenes, delitos y faltas, y, ejerce la titularidad de la acción penal pública Actúa en representación de la sociedad en los asuntos de intereses difusos
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)		Conoce de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, que fueran contrarios a una regla de derecho o dictados con desviación de poder

A esas entidades se suman, en segundo lugar, **organismos públicos con competencias en materias ambientales**, de nivel nacional o subnacional, con relevancia en relación a uno o más de los derechos de acceso.

En todo caso serán considerados titulares de obligaciones respecto de alguno de los pilares del Acuerdo, sea como “autoridades competentes” (apartado b) del artículo 2º del Acuerdo) o como “sujetos obligados” en cuanto al acceso a la información ambiental que manejan, o gestionan otros aspectos en cuanto a la participación o el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Potencialmente, todos los organismos del Estado podrían quedar incluidos en este segundo grupo, en la medida en que se relacionen -aun ocasionalmente- con alguno de los derechos de acceso, por lo que se han seleccionado aquellas entidades públicas con competencias en materias ambientales legalmente establecidas.

Algunos de los actores públicos incluidos en el primer grupo, también pueden formar parte de este segundo agrupamiento, cuando también sean titulares de obligaciones en relación a alguno de los pilares del Acuerdo.

No obstante, la diferenciación es importante, tanto para planificar la implementación del Acuerdo, como para identificar el contenido y alcance de los roles que les corresponde jugar en cada caso, constituyendo un insumo principal para abordar la propuesta de coordinación interinstitucional.

GRUPO 2		
Organismos públicos con competencias en materias ambientales		
Organismo	Área/departamento específico	Competencia de relevancia ambiental
ORGANOS en el AMBITO EJECUTIVO		
Ministerio de Ambiente (MA)	Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA)	Actúa como ámbito de coordinación y asesoramiento en materia de formulación, ejecución y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente
Ministerio de Ambiente (MA) (continuación)	Observatorio Ambiental Nacional (OAN)	Reúne y disponibiliza la información ambiental del MA y de los demás organismo públicos
	Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA)	Protege el ambiente, propiciando el desarrollo sostenible, mediante la planificación, gestión, evaluación, control y monitoreo ambiental Administra el Sistema de Información Ambiental y el Observatorio Nacional Ambiental Gestiona las autorizaciones ambientales y comisiones de seguimiento de grandes proyectos Recibe y gestiona denuncias ambientales Formula y da seguimiento al Plan Nacional Ambiental Ejerce la Secretaría de COTAMA
	Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ambientales (DINABISE)	Protege la diversidad biológica, continental y marina, desarrollando e implementando la política de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos Administra el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP) Preside la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y las Comisiones Asesoras Específicas de cada área

Organismo	Área/departamento específico	Competencia de relevancia ambiental
	Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)	Propender a la gestión integrada, participativa y sostenible de los recursos hídricos, garantizando a los habitantes el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de acceso al agua potable y al saneamiento Preside o ejerce la secretaría de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas
	Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC)	Lograr una adecuada transición hacia un desarrollo resiliente a la vulnerabilidad y cambio climático y bajo en emisiones de GEI Co-preside el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE)	Dirección de Medio Ambiente	Ejerce las competencias ambientales del MRREE
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Área de Defensa del Consumidor	Administra y ejecuta planes y programas relativos al seguimiento, difusión y cumplimiento de normas e informaciones de interés para el consumidor, buscando equilibrar las relaciones de consumo
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)	Prefectura Nacional Naval (PNN)	Previene y vigila la posible contaminación de las aguas de jurisdicción nacional, surgida por agentes contaminantes provenientes de buques, aeronaves y artefactos navales.
	Servicio de Parques del Ejército (SEPAE)	Gestiona los parques bajo administración del Ejército
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)	Dirección de Educación	Gestiona la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (ReNEA)
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)	Unidad Ambiental	Asesora a las distintas áreas del Ministerio en materia ambiental
	Dirección Nacional de Energía (DINAE)	Diseña e instrumenta las políticas del sector energético, incluyendo las energías renovables Orienta la transformación y el fortalecimiento de la matriz energética nacional para el desarrollo sustentable
	Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE)	Diseña e instrumenta las políticas del sector minero
Ministerio de Salud Pública (MSP)	División Salud Ambiental	Evalúa, valora y relaciona aspectos ambientales, incluyendo el ambiente laboral, que actúan como determinantes de la salud humana y que potencialmente puedan perjudicar la salud de generaciones actuales y futuras

Organismo	Área/departamento específico	Competencia de relevancia ambiental
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)	Dirección General de Recursos Naturales (RENA)	Promueve el uso y manejo racional de los recursos naturales, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del sector agropecuario y coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica
	Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	Protege y mejora el status fitosanitario, la calidad e inocuidad de productos vegetales, contribuyendo al desarrollo sustentable, al comercio agrícola, la preservación del ambiente y la salud de la población
	Dirección General Forestal (DGF)	Estudia y planifica el desarrollo forestal, tanto en tierras públicas como privadas, propendiendo al manejo forestal sostenible, a partir de la defensa, mejoramiento, ampliación y creación de recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y la protección del monte nativo
	Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria (DIGEBIA)	Coordina la implementación de las acciones de vigilancia en materia de inocuidad alimentaria. Realiza el seguimiento y balance de zafra de las actividades con eventos OGM regulados de investigación y producción de semilla con destino a la exportación
	Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)	Regula y promueve la utilización sustentable de los recursos pesqueros y de la acuicultura, mediante una pesca responsable y un procesamiento que satisfaga normas higiénico sanitarias y de calidad
	Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)	Diseña las políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria, con el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con una nueva concepción de modelo de producción, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental y la participación de los actores en el territorio
	Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA)	Ejecuta la política nacional de bienestar animal
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT)	Promueve y desarrolla los procesos de planificación y ordenamiento territorial, asegurando su implementación en todas las escalas territoriales.
ORGANOS en el AMBITO LEGISLATIVO		
Asamblea General	Senado	Comisión de Ambiente

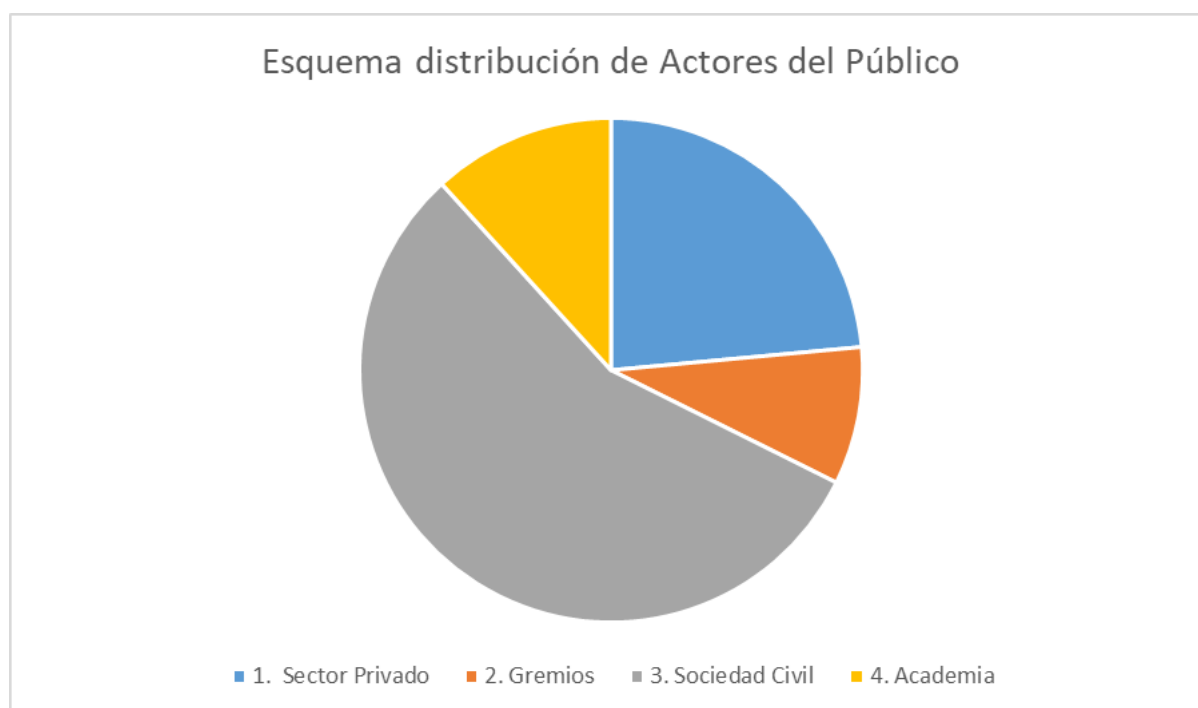
Organismo	Área/departamento específico	Competencia de relevancia ambiental
	Cámara de Representantes	Comisión Especial de Ambiente

ORGANOS en el AMBITO de la JUSTICIA		
Poder Judicial (PJ)	Suprema Corte de Justicia (SCJ)	Es el órgano jerarca del Poder Judicial, aunque sólo entiende en procesos que sean llevados a casación o que pretendan la inconstitucionalidad de una ley nacional o un decreto departamental
	Juzgados Letrados	Son los tribunales encargados de llevar adelante los procesos específicos, incluyendo la materia ambiental
	Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU)	Es la Escuela Judicial en Uruguay. Capacita abogados que busquen ingresar a la judicatura Busca asegurar la formación permanente de los jueces en funciones, como así también de los defensores públicos y mediadores
Ministerio Público y Fiscal	Fiscalía General de la Nación (FGN)	Ejerce las funciones del Ministerio Público y Fiscal Dirige la investigación de crímenes, delitos y faltas, y, ejerce la titularidad de la acción penal pública. Actúa en representación de la sociedad en los asuntos de intereses difusos
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)		Conoce de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, que fueran contrarios a una regla de derecho o dictados con desviación de poder
ORGANOS DEPARTAMENTALES		
Congreso de Intendentes (CI)		Coordina las políticas de los Gobiernos Departamentales y la celebración de convenios con el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las autonomías de cada gobierno departamental

B. MAPA DE ACTORES INTEGRANTES DEL PÚBLICO

Para la elaboración del mapa de actores en lo que el Acuerdo de Escazú denomina “público” (artículo 2º “d”), se identificaron organizaciones sociales o de la sociedad civil, del sector académico, del sector gremial y del sector privado.

La identificación de esas organizaciones será un insumo relevante para la definición del sistema de coordinación interinstitucional (paso 4), que tiene por objetivo ofrecer un marco estratégico y operativo para la puesta en marcha de una o más instancias que permitan la interacción y coordinación entre los diversos actores estatales y los que integran el público, que estarán involucrados en la implementación del Acuerdo.



A continuación, proponemos una forma de agrupamiento de los actores integrantes del público, para facilitar su identificación y análisis dentro del mapa de actores:

- (i) Actores de la sociedad civil, identificados como organizaciones no gubernamentales con acciones relacionadas al medio ambiente, los derechos humanos o el desarrollo sostenible, que pueden integrar instancias de participación social ya existentes en el Ministerio de Ambiente u otros organismos relacionados, como el MVOT o el MGAP, por ejemplo, o que pertenecen a redes organizaciones no gubernamentales, locales o comunitarias, con o sin personalidad jurídica.
- (ii) Actores del sector académico, incluyendo centros y observatorios universitarios dedicados a temas de medio ambiente, derechos humanos y desarrollo sostenible o imparten cursos en esas temáticas.
- (iii) Actores del sector privado, incluyendo asociaciones de empresas con un trabajo relevante en sustentabilidad y desarrollo sostenible, consultoras ambientales a cargo de elaborar los estudios ambientales de distinto tipo y oficinas o agencias de comunicaciones que asesoran a empresas en relacionamiento comunitario y estrategias de comunicación ambiental, entre otros temas.
- (iv) Actores del sector gremial y otros, como sindicatos de trabajadores y órganos coordinadores de sindicatos, organizaciones gremiales de profesionales con foco en temas ambientales o cooperativas de trabajadores en temas ambientales, como por ejemplo, cooperativas de recicladores.

Actores integrantes del público	
SECTOR	ORGANIZACIÓN
Sociedad civil	
	<ul style="list-style-type: none"> Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (ANONG) Red de segundo grado
	<ul style="list-style-type: none"> Red uruguaya de ONGs ambientalistas (REDUYONGAMB) Red de segundo grado
	<ul style="list-style-type: none"> Asociación de Agroecología - Red de Agroecología
	<ul style="list-style-type: none"> Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
	<ul style="list-style-type: none"> Colectivo Agua es Vida (Tacuarembó)
	<ul style="list-style-type: none"> Colectivo Guichón por los Bienes Naturales
	<ul style="list-style-type: none"> Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo)
	<ul style="list-style-type: none"> Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el desarrollo (CIEDUR)
	<ul style="list-style-type: none"> Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES)
	<ul style="list-style-type: none"> Centro Uruguayo Independiente (CUI)
	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
	<ul style="list-style-type: none"> Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas (CEUTA)
	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales
	<ul style="list-style-type: none"> Conservación de especies nativas del Uruguay (COENDU)
	<ul style="list-style-type: none"> Cultura Ambiental
	<ul style="list-style-type: none"> Centro Nacional para el desarrollo sustentable (CENADESU)
	<ul style="list-style-type: none"> DATA.ORG (Datos abiertos y cultura cívica)
	<ul style="list-style-type: none"> Fundación Lagunas Costeras
	<ul style="list-style-type: none"> Fridays for Future Uruguay
	<ul style="list-style-type: none"> Guardianes de la Costa

	<ul style="list-style-type: none"> Jugando en la Naturaleza (JULANA)
	<ul style="list-style-type: none"> Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
	<ul style="list-style-type: none"> REDES - Amigos de la Tierra Uruguay
	<ul style="list-style-type: none"> Red de Juvetudes para la Justicia Climática
	<ul style="list-style-type: none"> Socobioma
	<ul style="list-style-type: none"> Vida Silvestre
Académico	
	<ul style="list-style-type: none"> Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) Universidad de la República (UdelaR)
	<ul style="list-style-type: none"> Centro Universitario Regional Este (CURE) Universidad de la República (UdelaR)
	<ul style="list-style-type: none"> Colectivo Tá Universidad de la República (UdelaR)
Privado	
	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
	<ul style="list-style-type: none"> Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY)
	<ul style="list-style-type: none"> Asociación Rural del Uruguay (ARU)
	<ul style="list-style-type: none"> Federación Rural del Uruguay (FRU)
	<ul style="list-style-type: none"> Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)
	<ul style="list-style-type: none"> Compromiso Empresarial con el Reciclaje (CEMPRE)
	<ul style="list-style-type: none"> Consultora ambiental GEA
	<ul style="list-style-type: none"> Consultora ambiental EIA
	<ul style="list-style-type: none"> Consultora ambiental Enviro
	<ul style="list-style-type: none"> Consultora ambiental GEMA
	<ul style="list-style-type: none"> Consultora ambiental REACCION
	<ul style="list-style-type: none"> Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible (DERES)
	<ul style="list-style-type: none"> Responsables de comunicación institucional UPM

	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables de comunicación institucional Montes del Plata
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema B

Gremial	
	<ul style="list-style-type: none"> • Colegio de Abogados del Uruguay (Comisión de Derecho Ambiental)
	<ul style="list-style-type: none"> • Plenario Intersindical de Trabajadores/Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT) (Comisión de Medio Ambiente)
	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación de Ingenieros del Uruguay
	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperativa Uruguay Recicla (URECOOP)

CAPITULO IV - Propuesta de **COORDINACION INTERINSTITUCIONAL**

1. Introducción

Teniendo en cuenta el mapa de actores relevado en el capítulo anterior (capítulo III) y la multiplicidad de organismos relacionados con la implementación del Acuerdo de Escazú y de los derechos de acceso en el ámbito nacional, resulta fundamental establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional, que además contemple la adecuada participación de las entidades representativas del público, también identificadas en el capítulo que antecede.

El objetivo de este capítulo, es formular una propuesta de coordinación interinstitucional de los actores estatales y su vinculación con los actores académicos, gremiales, privados y de la sociedad civil.

Esa propuesta podría consistir en diseñar y sugerir la creación de una cierta institucionalidad, o analizar e identificar un ámbito de coordinación existente, que reúna los caracteres y la composición necesaria y al que pudiera corresponderle o asignársele la coordinación interinstitucional buscada.

Uruguay ha tenido numerosas experiencias de coordinación y transversalización. En particular, el Ministerio de Ambiente por sí, o a través de sus antecedentes institucionales (el INPMA primero, y el MVOTMA después), desarrollará una amplia trayectoria, con cometidos y ámbitos muy relevantes para la coordinación que se pretende.

2. El Ministerio de Ambiente y la COTAMA

Al Ministerio de Ambiente le corresponde la ejecución e instrumentación de la política nacional ambiental, de ordenamiento ambiental, de desarrollo sostenible y de conservación y uso de los recursos naturales que fije el Poder Ejecutivo, formulando, ejecutando, supervisando y evaluando los planes nacionales en esas materias (artículos 292 y 293 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020).

Para ello, el Ministerio de Ambiente puede celebrar convenios con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siendo el encargado de coordinar con las demás entidades públicas, nacionales, departamentales y municipales, en la ejecución de la política ambiental nacional (artículo 8° de la Ley General de Protección del Ambiente, Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000).

Entre las competencias del Ministerio de Ambiente, destacamos las relativas al fomento de la conciencia ambiental, a través de procesos participativos de educación ambiental, que estimulen un compromiso inclusivo en las acciones y procedimientos destinados a asegurar un desarrollo sostenible.

El Ministerio de Ambiente, a través de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA), ha desarrollado varios procesos de coordinación con actores estatales y con participación de actores sociales. Se encontraba ya prevista en el artículo 10 de la Ley N° 16.112, de 30 de mayo de 1990 (Ley de creación del MVOTMA), era fue constituida y reglamentada a través del Decreto 261/993, de 4 de junio de 1993, con modificaciones en el Decreto 303/994, de 28 de junio de 1994.

La COTAMA es un ámbito de asesoramiento y coordinación, presidida por el Ministerio de Ambiente, donde participan representantes de todos los ministerios, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), del Congreso de Intendentes, la Universidad de la República (Udelar), las cámaras empresariales y la confederación de trabajadores, así como de ONGs ambientalistas de segundo grado o superior. Es decir, su composición comprende en buena medida, los actores estatales y sociales identificados, según el detalle que figura en la siguiente tabla.

Actores identificados que integran la COTAMA	
Actores estatales identificados	Organismos integrantes del Plenario de la COTAMA
Ministerio de Ambiente (MA)	SI (antes MVOTMA/DINAMA)
- - -	Ministerio del Interior (MI)
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE)	SI
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	SI
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)	SI
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)	SI
- - -	Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)	SI
- - -	Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
Ministerio de Salud Pública (MSP)	SI
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)	SI
- - -	Ministerio de Turismo (MT)
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)	SI
- - -	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- - -	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP/AGESIC)	NO
Comisiones de Ambiente del Poder Legislativo	SI
Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)	NO
Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Poder Judicial (PJ)	NO

Ministerio Público y Fiscal Fiscalía General de la Nación (FGN)	NO
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)	NO
Congreso de Intendentes (CI)	Congreso de Intendentes (CI)
Actores integrantes del público identificados	Entidades integrantes del Plenario de la COTAMA
Social	Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (ANONG) Red de segundo grado
	Red uruguaya de ONGs ambientalistas (REDUYONGAMB) Red de segundo grado
Académico	Universidad de la República (UdelaR)
Privados	Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
	Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY)
	Asociación Rural del Uruguay (ARU)
	Federación Rural del Uruguay (FRU)
Gremial	PIT-CNT

Si bien de ese análisis surge que la mayor parte de los actores estatales y sociales identificados en el mapa de actores, es integrante natural de la COTAMA, hay algunos también vinculados a los derechos de acceso que no aparecen en forma explícita. En unos casos, ello puede deberse a la fecha de creación de esas organizaciones (UAIP o INDDHH, por ejemplo); en otros, puede ser consecuencia del alcance general de sus competencias, no específicamente ambientales (PJ, FGN o TCA, por ejemplo)

En el funcionamiento de la COTAMA, cuando los temas requieren un trabajo más específico que el que se puede desarrollar en Plenario o una participación más amplia, la convocatoria se extiende y se conforman grupos de trabajo para que un número mayor de instituciones y organizaciones participen. Los propios grupos de trabajo determinan su cronograma de actividades, la agenda de reuniones, así como la posibilidad de sumar nuevos integrantes en la medida que se detecta la conveniencia o la necesidad de su aporte.

Así se ha actuado en los procesos de estandarización ambientales y en la formulación de anteproyectos de ley o propuestas de reglamentaciones (como el Reglamento de Calidad del Aire) o para considerar temas específicos (como el Plan Nacional de Gestión de Residuos).

3. Formulación de la propuesta

Al inicio del trabajo, se propuso la utilización de los mecanismos de coordinación y participación existentes indicando al Ministerio de Ambiente para que actuara como líder y coordinador de las distintas instancias. Específicamente se sugiere que sea la COTAMA, a través de un grupo de trabajo específico a crearse, la

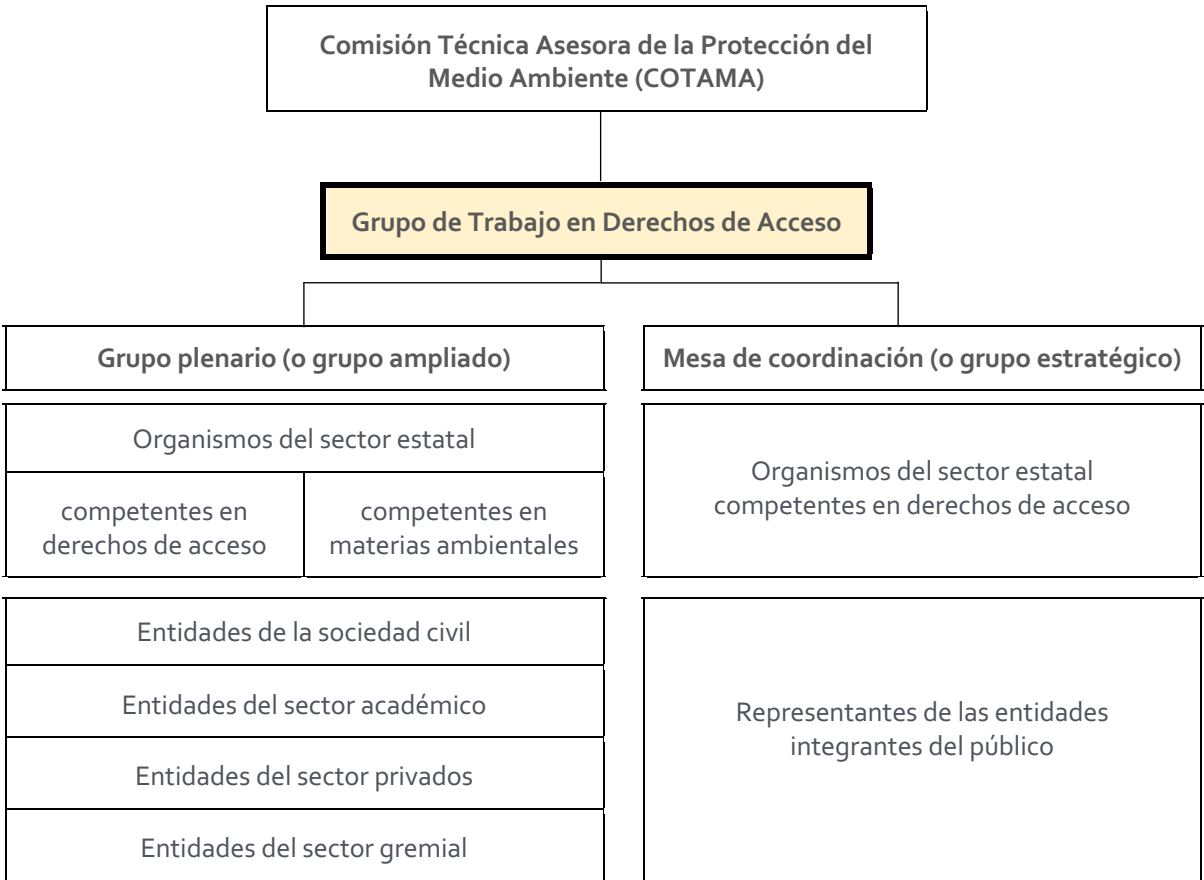
que en la práctica coordinará la implementación del Acuerdo de Escazú y de los derechos de acceso en Uruguay, dotándolo de los recursos humanos y materiales indispensables.

Ese grupo de trabajo podría constituirse y funcionar a través de dos grupos (o subgrupos), siguiendo la metodología propuesta por CEPAL, el grupo de trabajo propiamente dicho o grupo ampliado y un grupo estratégico o mesa de coordinación.

El pleno del grupo de trabajo (o grupo ampliado), estaría integrado por los organismos y entidades identificadas en el mapa de actores, tanto en el sector estatal, como en los sectores de la sociedad civil, académico, privado y gremial. Este grupo actuará como ámbito de coordinación y participación, analizará y formulará el plan nacional de implementación de los derechos de acceso, que propondrá a la COTAMA, para su remisión a la aprobación del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente. Asimismo, le corresponderá el apoyo a la ejecución, así como el seguimiento y propuesta de actualización del plan.

Por su parte, la mesa de coordinación (o el grupo estratégico) estaría integrada por los organismos estatales directamente competentes en derechos de acceso identificados en el mapa de actores, así como también, con representantes de los actores integrantes del público, también identificados en el mapa de actores.

A esa mesa le corresponderá proponer el anteproyecto de plan de implementación de los derechos de acceso al pleno del grupo de trabajo y la coordinación permanente en el ejercicio de los cometidos de los organismos públicos y en su relación con las entidades sociales, respecto de los objetivos y actividades que sean previstos en el plan de implementación de los derechos de acceso en el país.



3. La constitución del Grupo de Trabajo en Derechos de Acceso

El 29 de junio de 2023, se realizó la presentación de los avances y la propuesta de trabajo al Plenario de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA).

En dicha instancia, se resolvió la constitución de un grupo de trabajo, de carácter interinstitucional, denominado “Grupo de Trabajo en Derechos de Acceso”, con el cometido de acompañar el proceso de elaboración y ejecución de la hoja de ruta, coordinando acciones para contar con una propuesta de plan nacional de implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales en Uruguay.

El grupo de trabajo se organizó con la estructura propuesta y dio inicio de actividades, manteniendo dos reuniones en 2023 donde se recibieron aportes del trabajo realizado hasta el momento.

Los próximos pasos sugeridos se señalan en el capítulo siguiente.

CAPITULO V - Propuesta de **OBJETIVOS Y ACCIONES PRIORITARIAS**

Tomando en consideración los análisis realizados, a continuación se identifican una serie de objetivos generales y se proponen algunas acciones consideradas prioritarias, como una contribución al Plan Nacional para la Implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales, incluyendo aquellas que sería necesario materializar para la efectiva armonización del marco normativo vigente con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.

Sin perjuicio que existan más acciones que se podrían desarrollar en esta materia, aquí se incluyen aquellas que parece necesario priorizar, por ejemplo, con un horizonte hacia el año 2030.

Las propuestas de acciones priorizadas se presentan agrupadas para cada uno de los pilares del Acuerdo, pero no se incluye en esta instancia, plazos, metas o indicadores para cada acción, en el entendido que dependen de otras decisiones y capacidades.

A. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL	
A.1. Objetivo:	Fortalecimiento de las capacidades de cumplimiento de las solicitudes de acceso a la información, asegurando el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública ambiental.
Acción:	Relevar las necesidades de dotación de personal y de recursos materiales y técnicos a los sujetos obligados (Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008), con el objetivo de mejorar los procedimientos de respuesta a solicitudes y la entrega de información pública ambiental.
A.2. Objetivo:	Profundización de la información activa en asuntos ambientales, de modo de anticiparse a los requerimientos de las personas e instituciones interesadas y mejorar la accesibilidad de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Acciones:	Mantener actualizada la información ambiental a través de medios informáticos, reforzando la centralidad y uso del Observatorio Ambiental Nacional (OAN).
	Protocolizar el proceso de elaboración del Informe Ambiental Nacional, de forma de sistematizar la recolección y generación de información en tiempo hábil, para contar con el informe en períodos regulares, que incluya instancias de participación y de difusión.
A.3. Objetivo:	Mejoramiento de las prácticas administrativas en la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública ambiental, en concordancia con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
Acción:	Elaborar un protocolo de tramitación de las solicitudes de acceso a la información ambiental, que contemple las disposiciones vigentes y aquellas incorporadas en el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, como brindar información sobre las posibilidades de impugnar o recurrir.

A.4. Objetivo:	Implementación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como de materiales y desechos bajo la jurisdicción nacional.
Acción:	Analizar los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos para la incorporación progresiva de la información ambiental correspondiente a un registro de emisiones y transferencia de contaminantes.
A.5. Objetivo:	Actualización de la legislación de acceso a la información pública, en referencia a la información pública ambiental, en concordancia con el Acuerdo de Escazú y los avances internacionales en la materia.
Acción:	Promover y apoyar ajustes a la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, para actualizarla a la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a las disposiciones de los artículos 5 y 6 del Acuerdo que no surgen expresamente de la legislación nacional, como la remisión de la solicitud a otro organismo que pudiera poseer información o la ampliación de los sujetos obligados, incluyendo organizaciones privadas en los términos del apartado b) del artículo 2 del Acuerdo.
A.6. Objetivo:	Promoción del acceso de los consumidores y usuarios a información pública ambiental más completa sobre los posibles riesgos y efectos de bienes y servicios en la salud y el ambiente.
Acción:	Coordinar con las entidades gubernamentales relacionadas con la regulación de las relaciones de consumo, las necesidades de ajuste en las normativas y prácticas, con el fin de incluir mayor información sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus posibles riesgos y efectos sobre la salud y el ambiente, favoreciendo patrones de producción y consumo sostenibles.
A.7. Objetivo:	Promoción de la difusión de información pública ambiental de su competencia por parte de los gobiernos departamentales.
Acción:	Proponer a los gobiernos departamentales, a través del Congreso de Intendentes, relevar el estado de situación respecto de la implementación del derecho de acceso a la información ambiental, a nivel departamental y local, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
A.8. Objetivo:	Sensibilización y capacitación de los funcionarios de los sujetos obligados, sobre la transcendencia del derecho de acceso a la información ambiental y el alcance e implementación del Acuerdo de Escazú.
Acción:	Elaborar guías y ofrecer talleres de sensibilización o cursos de capacitación a los funcionarios y técnicos de los sujetos obligados, contribuyendo a la mejor tramitación de las solicitudes de acceso y a la difusión activa de la información ambiental, buscando hacerlos parte de la implementación del Acuerdo de Escazú en esa materia.
A.9. Objetivo:	Cooperación con otros Estados Parte, ofreciendo compartir las prácticas y experiencias nacionales en acceso a la información pública ambiental.
Acción:	Identificar las políticas e instrumentos de acceso a la información ambiental que podrían brindarse en forma de fortalecimiento de capacidades, entre otras, capacitación y asistencia, visitas o intercambio técnico, como: legislación en materia de acceso a la información pública u organización y funcionamiento de un observatorio y/o una autoridad en materia de información pública.

B. PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES	
B.1. Objetivo:	Mejoramiento de las instancias de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, con apego a los estándares previstos por el Acuerdo de Escazú, que guíen a los responsables y organizadores y que ofrezcan garantías al público.
Acciones:	Establecer criterios generales o reglas mínimas para la participación del público, especialmente en las consultas y audiencias públicas, previendo aspectos básicos (como número de instancias, representatividad de los actores o formas de recepción de aportes), así como herramientas que aseguren la efectividad de la participación, ofreciendo garantías de consideración de las opiniones o propuestas recibidas, expresando las razones para adoptarlas o no.
	Elaborar y difundir una guía destinada al público que desee formar parte de las instancias de participación pública, de forma de facilitarle el conocimiento anticipado de la dinámica, posibilidades y alcances de esa participación en procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales.
B.2. Objetivo:	Fortalecimiento de las capacidades de realización de las instancias de participación pública requeridas en los procesos de toma de decisiones ambientales, asegurando el efectivo ejercicio del derecho de participación pública según los criterios generales que se identifiquen.
Acción:	Relevar las necesidades de dotación de personal y de recursos materiales y técnicos de los responsables y organizadores de las instancias de participación pública, con el objetivo de posibilitar y asegurar los criterios generales identificados para la adecuada y efectiva participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales.
B.3. Objetivo:	Facilitación de la información sobre las instancias de participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales.
Acción:	Generar un relevamiento de las instancias y mecanismos de participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, tanto a nivel nacional como departamental, y ponerlo a disposición de las organizaciones y el público.
B.4. Objetivo:	Profundización de la participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Acción:	Generar mecanismos de incentivo y crear instancias de participación formales de los jóvenes en asuntos ambientales, del tipo de "Diálogos del Futuro", buscando concientizar y dar un lugar adecuado a las futuras generaciones.
B.5. Objetivo:	Sensibilización y capacitación de los funcionarios relacionados con la participación pública, sobre la transcendencia de la participación del público en procesos de toma de decisiones ambientales.
Acción:	Realizar talleres de sensibilización o cursos de capacitación a los funcionarios y técnicos responsables y organizadores de las instancias de participación pública, contribuyendo al mejor desarrollo de esos ámbitos, buscando hacerlos parte de la implementación del Acuerdo de Escazú en esa materia.

B.6. Objetivo:	Cooperación con otros Estados Parte, ofreciendo compartir prácticas y experiencias nacionales en participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales.
Acción:	Identificar las políticas e instrumentos de participación pública en asuntos ambientales, que podrían brindarse como fortalecimiento de capacidades, capacitación o asistencia y visitas técnicas, como participación en procesos de estandarización, de elaboración de normativa o de evaluación de impacto ambiental y administración de áreas naturales protegidas.

C. ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES

C.1. Objetivo:	Capacitación de los operadores jurídicos en derechos de acceso e implementación del Acuerdo de Escazú.
Acción:	Proponer u organizar capacitaciones, cursos y especializaciones en derechos de acceso, destinadas a jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes, públicos y privados, a través del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) y las facultades de Derecho, entre otros.
C.2. Objetivo:	Fortalecimiento de las capacidades de asesoramiento y asistencia jurídica a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, para acceder a la justicia en asuntos ambientales.
Acción:	Relevar las posibilidades de asesoramiento y asistencia jurídica a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, para acceder a la justicia en asuntos ambientales, identificando las necesidades de dotación de personal y de recursos materiales y técnicos de la defensoría de oficio y de los consultorios jurídicos universitarios, entre otros.
C.3. Objetivo:	Incorporación de instrumentos jurídicos para mejorar los procesos colectivos ambientales, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
Acción:	Promover y apoyar la elaboración de un proyecto de ley de procesos colectivos, que atienda al mejoramiento de los procesos colectivos ambientales, recogiendo las posiciones más recibidas de la doctrina nacional y los estándares propuestos por el Acuerdo de Escazú.
C.4. Objetivo:	Mejoramiento de las posibilidades de sanción, reparación y recomposición en los casos de daño al ambiente.
Acción:	Impulsar la aprobación del proyecto de ley de delitos contra el ambiente y el proyecto de ley de responsabilidad por daño ambiental.
C.5. Objetivo:	Cooperación con otros Estados Parte, ofreciendo compartir prácticas y experiencias nacionales en acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Acción:	Identificar las políticas e instrumentos de acceso a la justicia en asuntos ambientales, que podrían brindarse en forma de fortalecimiento de capacidades, entre otras, capacitación y asistencia, visitas o intercambio técnico, como: legitimación de intereses difusos y acciones colectivas, o procedimiento sancionatorio administrativo.

D. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS AMBIENTALES	
D.1. Objetivo:	Acompañamiento de los avances regionales en materia de protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en el ámbito del Acuerdo de Escazú.
Acción:	Participar en forma proactiva en los espacios regionales destinados a implementación del Acuerdo de Escazú con relación a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en el ámbito del Acuerdo de Escazú.
D.2. Objetivo:	Prevención de situaciones de afectación de personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Acción:	Elaborar criterios preventivos y específicos, que permitan identificar situaciones que podrían constituir o derivar en afectaciones a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en incumplimiento del Acuerdo de Escazú.
D.3. Objetivo:	Cooperación con otros Estados Parte, en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Acción:	Solicitar el apoyo de la agencia para los refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), para la elaboración de un protocolo que recoja los criterios e instrumentos del Acuerdo, teniendo en cuenta las posibilidades de dar acogida a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales perseguidas por fines diferentes a los políticos.

CAPITULO VI - Estrategia de **INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN**

1. Presentación

La implementación del Acuerdo de Escazú y de los derechos de acceso en el país, resulta alcanzada por las disposiciones del Acuerdo y la legislación nacional en la materia, especialmente en cuanto a lo relacionado con las posibilidades de acceso a la información y a la participación del público en el proceso.

Por ello, la metodología propuesta por CEPAL prevé contar con una estrategia de información y participación que complemente y expanda las actividades y propuestas del mecanismo de coordinación interinstitucional (capítulo IV) a otras instituciones y ámbitos de la sociedad civil y el público en general, más allá de los organismos y entidades directamente integradas .

De esa forma, se espera un mayor conocimiento público de la existencia misma del proceso, así como la posibilidad recibir otras opiniones que enriquezcan las propuestas que se formulan.

2. Objetivos

En esta etapa del proceso de implementación del Acuerdo, la estrategia de información y participación que se propone, apunta a:

- a) contribuir a la difusión inicial del Acuerdo de Escazú y de los derechos de acceso;
- b) ampliar el conocimiento del público acerca del proceso de implementación, primariamente referido a la elaboración de esta Hoja de Ruta, para su mejoramiento y robustecimiento;
- c) recibir insumos adicionales para el análisis de línea de base (capítulo II) y el mapa de actores (capítulo III);
- d) habilitar la recepción de opiniones sobre las propuestas de coordinación interinstitucional (capítulo IV) y de acciones priorizadas (capítulo V); y,
- e) posibilitar la validación pública del proceso de elaboración de la Hoja de Ruta, como producto de las actividades propositivas y de asesoramiento que el Grupo de Trabajo y la COTAMA puedan realizar al Ministerio de Ambiente y, por su intermedio, al gobierno nacional, en esta instancia de la implementación del Acuerdo y de los derechos de acceso.

3. Actividades propuestas

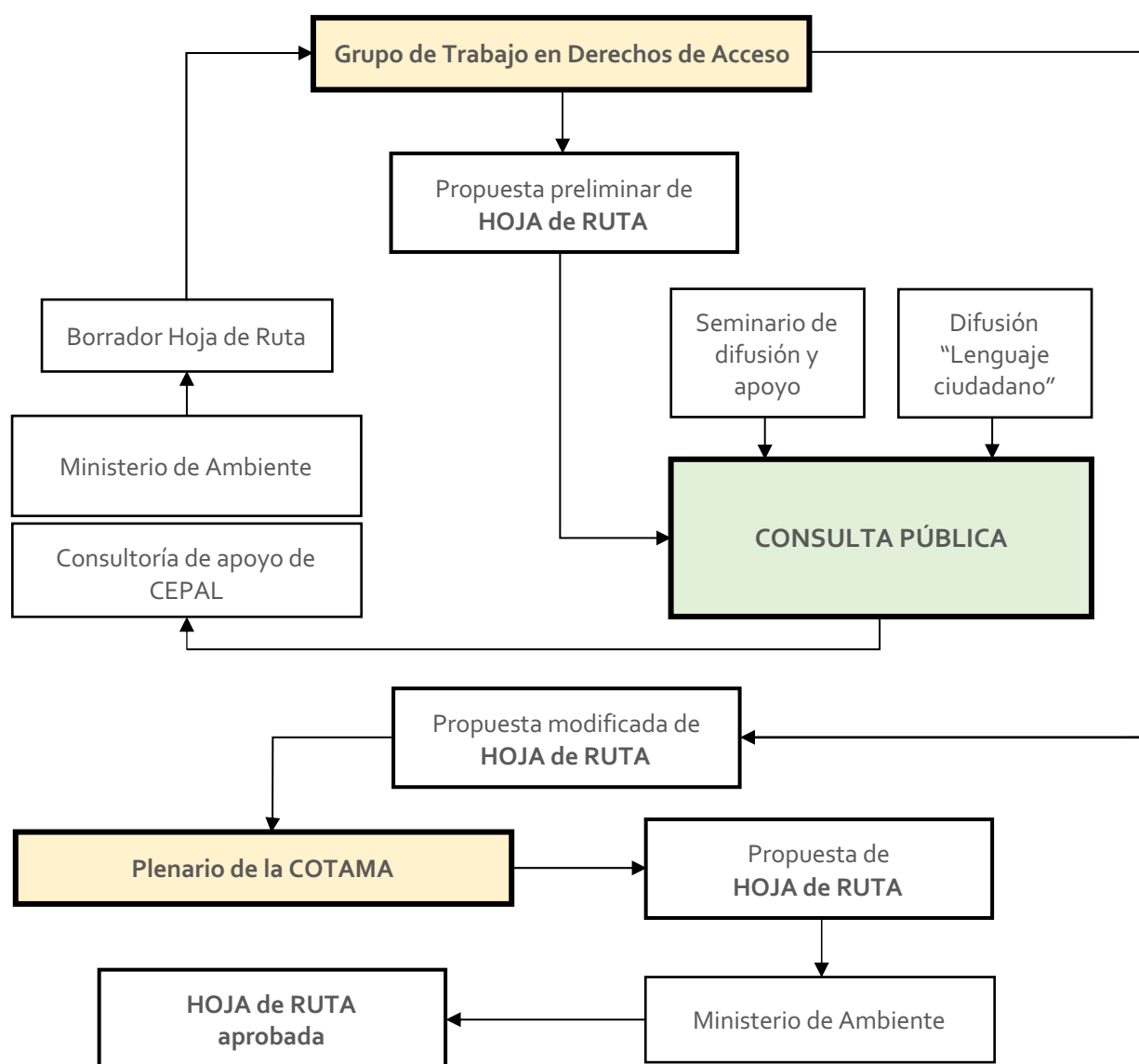
A partir de las observaciones y conclusiones contenidas en este mismo documento, se propone que la estrategia de información y participación en esta instancia, incluya:

- (i) La utilización de los medios de comunicación tradicionales, además de las redes sociales, con el fin de informar en lenguaje llano los distintos aspectos relacionados a los pilares del Acuerdo, por ejemplo a través de campañas de bien público dentro del programa “Lenguaje Ciudadano” de IMPO.
- (ii) Realización de una puesta de manifiesto del resumen ejecutivo del proyecto de Hoja de Ruta, por un período aproximado de un mes, mediante la difusión del documento, a través de los canales del propio Ministerio de Ambiente y de los organismos e instituciones integradas al Grupo de Trabajo.

A esos efectos, se habilitará la recepción de comentarios, observaciones y opiniones, a través de las mismas entidades y mediante un sistema de consulta pública electrónica, que facilite la comunicación de cualquier interesado y la recepción sistematizada de esas participaciones para su procesamiento, realizando los agregados y ajustes resultantes, a través del Grupo de trabajo.

- (iii) Organización de un seminario sobre derechos de acceso e implementación, abierto a instituciones y público, en el que se puedan presentar los pilares del Acuerdo y el proceso de implementación, para contribuir a la difusión del documento y facilitar el análisis y la formulación de opiniones por parte de cualquier interesado.
- (iv) Presentación de la versión modificada del documento al Plenario de la COTAMA para su consideración y remisión a la aprobación gubernamental, a través del Ministerio de Ambiente.
- (v) Incorporación de niños, adolescentes y jóvenes, adecuando el lenguaje para su participación y elaborando materiales y campañas de comunicación dirigidas específicamente.

Propuesta de estrategia de información y participación



Bibliografía

Blengio Valdés, Mariana. "Derecho Humano a un medio ambiente sano", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Montevideo, Uruguay. Año 2.2003.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: Guía de Implementación", (LC/TS.2021/221/REV.1), Santiago, 2022.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" (LC/TS.2017/83), 2018.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 151 "Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe: Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas". (LC/L.3549/REV.2), Santiago, 2013.

Delpiazzo, Carlos E. "Derecho de Acceso a la Información Pública Ambiental", Jurisprudencia Comentada. Tribuna del Abogado -Colegio de Abogados del Uruguay. Enero/marzo 2013, Montevideo, Uruguay.

Delpiazzo, Carlos E. DIGNIDAD HUMANA Y PRINCIPIO "PRO HÓMINE" EN LOS LITIGIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS. Revista Derecho Público, [S.l.], n. 54, p. pp. 35 - 46, dic. 2018. ISSN 2301-0908.

Detjen, Andrea. "Tejiendo Comunidades sostenibles. La gestión ambiental, un desafío para los gobiernos municipales", CIEDUR- Área de Desarrollo y Ambiente del Centro Interdisciplinario de estudios sobre el Desarrollo, (2021) Montevideo, Uruguay.

Informe Final: "Derechos de Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales", Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Ambiente. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Julio 2020, Montevideo, Uruguay.

CAINFO, GAIA, Open Society Foundations, "EL PRINCIPIO 10- Informe sobre la situación del derecho de Acceso a la Información Ambiental, Participación y Acceso a la Justicia en Uruguay", 2013, Montevideo, Uruguay.

Catálogo de Participación Ciudadana, El Catálogo | Catálogo de Participación Ciudadana (www.gub.uy).

UNICEF Uruguay, "La perspectiva de la infancia en los instrumentos ambientales y de cambio climático", 2021.

Pereira Campos, Santiago, "Procesos Colectivos. Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos" La Ley Uruguay, 2016. Montevideo, Uruguay.

Prieur Michel, Sozzo Gonzalo, Nápoli Andrés (eds.), "Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia Ambiental en América Latina y el Caribe", colección Ciencia y Tecnología, Ediciones UNL, 2021, Santa Fe, Argentina.

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2010), "Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales". Adoptado por el Consejo de UNEP en la Decisión SS. XI/5, parte A de 26 de febrero de 2010" [en línea] <http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/Directrices%20para%20la%20elaboracion%20de%20legislacion%20nacional%20sobre%20el%20acceso.pdf>.

Listado de acrónimos

ACUERDO: Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

AGESIC: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información

ARCE: Agencia Reguladora de Compras Estatales

CDN: Contribución Determinada a nivel Nacional

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COASAS: Comisión Asesora de Agua y Saneamiento

COAOT: Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial

COTAMA: Comisión Técnica de Medio Ambiente

ENAP: Escuela Nacional de Educación Pública

FDER: Facultad de Derecho

UDELAR: Universidad de la República, República Oriental del Uruguay.

MA: Ministerio de Ambiente (antes MVOTMA)

MEC: Ministerio de Educación y Cultura

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería

MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores.

MSP: Ministerio de Salud Pública

MVOT: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (antes MVOTMA)

OAN: Observatorio Nacional ambiental

PE: Poder Ejecutivo

PIT-CNT: Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores

PJ: Poder Judicial

PL: Poder Legislativo

PNC: Punto Nacional de contacto

SECRETARÍA: Secretaría del Acuerdo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe

SIA: Sistema de Información Ambiental

SINAE: Sistema Nacional de Emergencias

TCA: Tribunal de lo Contencioso Administrativo

UAIP: Unidad de Acceso a la Información Pública

HOJA DE RUTA
para la elaboración del Plan Nacional de Implementación de
los derechos de acceso en asuntos ambientales

ACUERDO DE ESCAZÚ - URUGUAY

Documento no definitivo
Sujeto a consulta pública
Marzo de 2024